

**NUEVO PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAS MAYORES Y DISCAPACIDAD RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY PARA PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO POSITIVO, EL CUIDADO INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES, Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL ADULTO MAYOR**

---

**BOLETINES N<sup>os</sup> 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07, refundidos.**

**Honorable Cámara:**

Vuestra **Comisión de Personas Mayores y Discapacidad** tiene el honor de informar el proyecto de ley antes referido, que se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República y en mociones de los senadores señoras Goic y Órdenes y señores Chahuán, Quinteros y Sandoval.

**Constancia de la Secretaría Legislativa de la Comisión.** Se deja constancia de que, con fecha 13 de agosto de 2024, se dio cuenta en Sala del primer informe en segundo trámite constitucional del proyecto antes referido. Posteriormente, con fecha 4 de junio de 2025, y mediante oficio N° 20.519, el Secretario General comunicó a la Mesa de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad que los Comités Parlamentarios acordaron remitir nuevamente el proyecto de ley a dicha Comisión, hasta el 16 de junio de 2025, con el objeto de elaborar un nuevo primer informe.

Entre la presentación del primer informe -dado cuenta en Sala el 13 de agosto de 2024- y la solicitud de este nuevo primer informe, la iniciativa recibió indicaciones tanto de la Comisión de Hacienda como de la Sala, en el marco de su discusión general.

Este nuevo primer informe se remite al originalmente emitido en todo aquello que no sea contradictorio con el presente, el cual se centrará exclusivamente en las indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda y aquellas presentadas en Sala durante la discusión general. En cada caso, se recomendará su aprobación o rechazo, según se expondrá más adelante, así como el texto resultante conforme a los acuerdos adoptados por la Comisión.

- - -

Durante el análisis de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la colaboración de la Ministra de Desarrollo Social y Familia señora Javiera Toro Cáceres, junto a su jefe de asesores Fernando Carvallo; de la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, Claudia Asmad.

### **I.- Idea Matriz o Fundamental del Proyecto**

Se recuerda a la H. Sala que las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa son promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, el fortalecimiento de la institucionalidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor y crear una modalidad de trabajo flexible para adultos mayores.

### **II.- Constancias Reglamentarias Previas**

Solo con el ánimo de recordar y no reiterar el contenido del primer informe, paso a exponer, brevemente, las constancias reglamentarias previas de la iniciativa.

#### **1. Artículos que el Senado calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado y aquellos a los cuales la comisión otorgue igual carácter.**

El Senado calificó como normas de rango orgánico constitucional las siguientes disposiciones, en razón de lo dispuesto en el artículo 38 y 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental:

Artículo 15, ahora reemplazado por el 21.

Artículo 16, actualmente eliminado.

Artículo 18, actualmente eliminado.

Artículo 21, ahora reemplazado por el 30.

Artículo 22, que pasó a ser 31.

Artículo segundo, tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley.

Se hace presente que la Comisión del Senado que sostuvo la tramitación legislativa de este proyecto de ley envió un oficio solicitando el parecer de la Excelentísima Corte Suprema, respecto del artículo 18 del texto que se propone, en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental, y el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha iniciativa incide en las atribuciones de los tribunales de justicia.

La Comisión calificó como orgánica constitucional las siguientes disposiciones del texto aprobado por la misma:

**Artículo 23 inciso cuarto**, por alterar la competencia relativa<sup>1</sup> de los tribunales de familia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado.

**Artículo 28, numero 1.**, por alterar la competencia absoluta<sup>2</sup> de los tribunales de justicia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado.

**3. Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, los que deberán ser determinados por el presidente de la comisión.**

La comisión consideró que no hay disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

**5. Mención precisa de las reservas de constitucionalidad formuladas.**

No hubo.

**6. Circunstancia de haberse comunicado a la Corte Suprema las disposiciones que han sido incorporadas en este trámite al proyecto o han sido objeto de modificaciones sustanciales respecto de las conocidas por dicha Corte (artículo 304 N° 9 RCD).**

Con fecha 9 de agosto de 2024, mediante el oficio N° 185/35/2024, la Comisión remitió a la Excelentísima Corte Suprema una copia del texto aprobado por la Comisión, con el fin de que emita su opinión sobre el texto contenido en el inciso cuarto del artículo 23 y numeral 1 del artículo 28, los que inciden en materia de organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Todo lo anterior se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

**7. Diputada Informante.**

Señora Catalina del Real Mihovilovic.

**8. Indicaciones rechazados por la comisión.**

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen al artículo 3, inciso segundo, letra i) para sustituirlo por el siguiente:

---

<sup>1</sup> Competencia relativa: es la que le corresponde a un determinado tribunal para conocer de un asunto litigioso en razón de su ubicación o territorio, dentro de una determinada categoría o jerarquía.

<sup>2</sup> Competencia absoluta: determina la jerarquía, clase o categoría de un tribunal, en base al fuero, materia o cuantía del asunto litigioso.

“i) La equidad e igualdad de sexos.”.

- De la Comisión de Hacienda, para intercalar, a continuación del artículo 7, el siguiente artículo 8, nuevo, pasando el actual artículo 8 a ser 9, y así sucesivamente:

“Artículo 8.- Promoción y protección de derechos humanos de las personas mayores. La promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En el ejercicio de esta función, el Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá difundir, especialmente, el conocimiento sobre derechos humanos de las personas mayores y las diversas formas de vulneración que pueden constituir violación a estos derechos. Asimismo, deberá destinar personal a la interposición de acciones legales y/o constitucionales en los casos en que las personas mayores sean víctimas de violaciones a los derechos humanos y al monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos de las personas mayores, especialmente de las que se encuentren en establecimientos de larga estadía para adultos mayores.”.

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, al artículo 8 inciso segundo para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho y, en especial, asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, teniendo en consideración un enfoque territorial, de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas.”.

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, al artículo 20 inciso final para sustituirlo por el siguiente:

“Las acciones y medidas de apoyo y cuidado de la persona mayor que los órganos de la Administración del Estado y entidades privadas colaboradoras del Estado brinden a las personas mayores, sea que se ejecuten directamente o a través de terceros, deberán realizarse respetando la dignidad e integridad física y psíquica de la persona mayor, así como también el respeto de su autonomía, en condiciones de igualdad, considerando un enfoque preventivo, gerontológico, de derechos humanos, de curso de vida, territorial, comunitario y biopsicosocial, que aborde tanto las necesidades de salud como sociales de las personas mayores.”.

- De S.E. el Presidente de la República, para suprimir el artículo 29, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes.

- De la diputada Lorena Fries Monleón y del diputado Andrés Giordano Salazar, para reemplaza el artículo 29 por el siguiente:

“Artículo 29.- Incorpórase el siguiente artículo 184 ter en el Código del Trabajo, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

“Artículo 84 ter.- El empleador deberá, sólo a requerimiento del trabajador o trabajadora que haya alcanzado la edad establecida en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.828, evaluar la posibilidad de realizar ajustes razonables a las condiciones de trabajo, tales como la adecuación de horarios, funciones o modalidad de prestación de servicios, cuando ello sea necesario para compatibilizar el desempeño laboral con su salud, capacidades o situación personal o familiar.

Dichos ajustes deberán implementarse de común acuerdo y sin que impliquen una disminución de derechos o condiciones contractuales previamente adquiridas, ni constituir discriminación por motivo de edad. Si el trabajador o la trabajadora se encontrara afiliadas a una organización sindical, dicho acuerdo deberá contar con su colaboración.”.

- De S.E. el Presidente de la República para agregar el siguiente artículo sexto transitorio, nuevo, pasando el actual artículo sexto transitorio a ser artículo séptimo transitorio y así sucesivamente:

“Artículo sexto transitorio.- El Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá informar semestralmente a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados y Diputadas, y a la Comisión del Senado que corresponda, las medidas implementadas y acciones judiciales y/o administrativas interpuestas en favor de las personas mayores, en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley.

El referido informe deberá publicarse en el sitio electrónico de dicho instituto.

El primer informe deberá ser enviado por dicho instituto en el plazo máximo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.”.

- De la Comisión de Hacienda para reemplazar el artículo sexto transitorio por el siguiente:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respectivamente, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

\*\*\*\*\*

Por tratarse de un nuevo primer informe, todo lo concerniente a los antecedentes; a la síntesis de la discusión general y a la mención de las adiciones y enmiendas que la comisión aprobó en la discusión particular se omite en este trámite, toda vez que esa información se consigna en el informe evacuado por esta Comisión en el segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario.

#### **V.- SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN, Y ACUERDOS ADOPTADOS.**

##### **Discusión particular**

##### Al Artículo 3, inciso segundo

##### literal d)

Artículo 2.- Principios. La interpretación y aplicación de esta ley deberá hacerse de conformidad con los principios consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, son principios generales de la presente ley:

(...)

“d) La igualdad y no discriminación.”.

##### Indicaciones:

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen: Al literal d), para intercalar, entre la expresión “no discriminación” y el punto final, la palabra “arbitraria”. **Aprobado.**

**La señora Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia,** manifestó no tener reparaciones a la indicación del diputado Kaiser, por cuanto mantiene el espíritu de la redacción originaria.

Sometida a votación la indicación del diputado Kaiser, **fue aprobada por unanimidad (6-0-0)**. Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Letra i)

“i) La equidad e igualdad de género.”.

Se presentó la siguiente indicación:

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen: Al literal i), para sustituirlo por el siguiente: **(Rechazada)**.

“i) La equidad e igualdad de sexos.”.

La señora **Toro**, ministra de Desarrollo Social y Familia, manifestó su disconformidad con la indicación presentada.

La diputada **Mix** expresó su voluntad de rechazar la indicación del diputado Kaiser, considerándola un retroceso en lo ya aprobado.

El diputado **Melo** también se manifestó contrario a la indicación, considerándola descontextualizada al siglo XXI.

La diputada **Marzán** considera que igualdad de género es un concepto más amplio, que aborda no solo diferencias de sexo, sino culturales y sociales, principalmente en aspectos que afectan a las mujeres, por lo que significaría retroceder en la materia y desconocer compromisos del Estado a nivel internacional.

**Sometida a votación la indicación del diputado Kaiser, fue rechazada (2-3-1)**. Votaron a favor la diputada Catalina del Real (presidenta accidental) y el diputado Renzo Trisotti. Votaron en contra las diputadas Carolina Marzán y Claudia Mix, y el diputado Daniel Melo. Se abstuvo la diputada Carla Morales. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

letra ñ)

“ñ) El acceso igualitario a la justicia.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República: A la Letra ñ), para intercalar, entre la palabra “igualitario” y la frase “a la justicia”, la expresión “y efectivo”; y entre la palabra “justicia” y el punto aparte, la frase “y la protección judicial efectiva”. **(Aprobada).**

La **ministra de Desarrollo Social y Familia** fundó la indicación en una observación realizada por la Corte Suprema durante el trámite de formación de ley. En este caso, utilizar la expresión “el acceso efectivo” ofrecen un desglose más acabado de los principios que rigen la interpretación de la ley.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (6-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Letra p)

“p) El de acceso a la educación.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República: A la Letra p), para eliminar la palabra “de”. **(Aprobada).**

Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada sin mayor debate por unanimidad (6-0-0). Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al Artículo 4

letra a)

“Artículo 3.- Conceptos. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

a) Persona mayor: toda persona con sesenta años y más, en conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este concepto incluye el de adulto mayor y el de

adulto mayor en la cuarta edad, que corresponde a las personas con ochenta años y más. Toda referencia en leyes, reglamentos y demás normativa vigente a estas expresiones deberá entenderse efectuada a persona mayor.

Se presentó una indicación:

- De S.E. el Presidente de la República: A la Letra a), para reemplazar, entre la palabra “mayor” y la expresión “la cuarta edad”, la palabra “en” por “de”.  
**(Aprobado).**

La señora **Toro** aclaró que es una modificación formal que busca hacerla compatible con la ley N° 18.918.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Letra f)

“f) Persona mayor con dependencia: aquella que, por razones derivadas de una o más condiciones de salud de origen física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requiere de servicios de apoyo y/o cuidados de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria y participar de la sociedad.”

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República: A la Letra f), para eliminar las frases “ligadas a la falta o pérdida de autonomía” y “servicios de apoyo y/o”.  
**(Aprobada).**

La **ministra Toro** refirió que, con la redacción, se busca perfeccionar la redacción del concepto de persona mayor con dependencia, eliminando la referencia a la falta o pérdida de autonomía, en coherencia con el proyecto de ley de Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, moción aprobada ya en primer trámite constitucional.

Sumado a lo anterior, indicó que se pretende homogenizar el concepto de persona mayor con dependencia en el sentido observado por la Corte Suprema, conforme el artículo 23 del procedimiento especial de abandono.

**Sometido a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel

Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Letra g)

“g) Discriminación por edad en la vejez: cualquier distinción, exclusión o restricción arbitraria basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política y social, económica cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.”.

Indicación:

- De S.E. el Presidente de la República: A la Letra g), para reemplazar la frase “anular o restringir” por la expresión “anular, restringir o desconocer”.  
**(Aprobada).**

La **ministra Toro**, en el mismo sentido que lo indicado en la indicación N° 6, informó que el informe de la Corte Suprema recomendó concordar esta definición con las normas vigentes, indicando que los efectos no solo son los de anular o restringir los derechos de las personas mayores, sino también pueden “desconocerlos”, lo que es una forma de discriminación.

La diputada **Del Real** (presidenta accidental) consideró que, en términos prácticos, con los verbos anular o restringir, se satisface el objeto. Con todo, se manifestó abierta a la indicación.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados

- - -

Al artículo 5, inciso cuarto

(...)

“Todo acto de discriminación arbitraria por edad contra las personas mayores en la vejez, podrá ser denunciado de conformidad a la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República: Al inciso cuarto: **(Aprobado)**.

a) Para intercalar, entre la palabra “denunciado” y la expresión “de conformidad”, la frase “y será sustanciado”.

b) Para intercalar, entre las expresiones “de conformidad” y “la ley N° 20.609”, la frase “las reglas contenidas en el Título II de”.

La **ministra Toro** reiteró que esta modificación solo considera hacer más coherente lo ya aprobado con las actuales normas jurídicas que regulan los procedimientos.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 6, inciso tercero

(...)

“En caso de que un proveedor, de acuerdo con la definición proporcionada por la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, cometa una infracción a lo anteriormente mencionado, se considerará una violación específica del derecho a la no discriminación arbitraria, según lo establecido en el artículo 3° letra c) de dicho cuerpo normativo. Esto, sin perjuicio de otros derechos que asisten a las personas mayores en calidad de consumidores.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República: Al inciso tercero, para reemplazar la palabra “otros” por “los”. **(Aprobado)**.

En el mismo sentido que ya ha venido sosteniendo, la **ministra Toro** enfatizó que lo más correcto es hablar de “los derechos” y no de “otros derechos”, evitando inducir el error interpretativo de considerar que se refieren a otros derechos en su calidad de consumidor. Es definitiva, estaríamos hablando de todos los derechos de las personas en su calidad de consumidores, sin distinción.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel

Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 7, numerales 3 y 4

(...)

“3. Promover que las personas mayores reciban atención preferente y prioritaria en todos los procesos judiciales en los que intervengan en las calidades señaladas en el párrafo primero, asegurando siempre el respeto a las garantías del debido proceso.

4. Garantizar la debida diligencia y un trato preferente en la tramitación de las causas en que intervengan personas mayores de la cuarta edad, en las calidades señaladas en el párrafo primero. En las actuaciones efectuadas en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, priorizar la atención y agilizar el procedimiento en los casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor, cuando esta sea interviniente, en las mismas calidades referidas previamente.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República: A los numerales 3 y 4, para reemplazarlos, por el siguiente numeral 3, nuevo: **(Aprobado)**.

“3. Promover y garantizar la debida diligencia y una atención preferente y prioritaria en todos los procesos judiciales en los que intervengan personas mayores en las calidades señaladas en el párrafo primero, asegurando siempre el respeto a las garantías del debido proceso. En los casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor, cuando esta sea interviniente en las mismas calidades referidas previamente, se propenderá a la priorización de la atención y agilización del procedimiento tratándose de las actuaciones efectuadas ante los tribunales de justicia.”.

La **ministra Toro** indicó que la fusión de ambos numerales obedece a una observación de la Corte Suprema, en razón de que la distinción entre personas adultas mayores y personas de cuarta edad no tiene sentido en este ámbito, siendo el supuesto principal que justifica la atención preferencias es la protección, frente al riesgo, de la salud de las personas mayores.

**Sometido a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel

Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

#### Artículo 8, nuevo

- De la Comisión de Hacienda, para intercalar, a continuación del artículo 7, el siguiente artículo 8, nuevo, pasando el actual artículo 8 a ser 9, y así sucesivamente: **(Rechazada)**.

“Artículo 8.- Promoción y protección de derechos humanos de las personas mayores. La promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En el ejercicio de esta función, el Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá difundir, especialmente, el conocimiento sobre derechos humanos de las personas mayores y las diversas formas de vulneración que pueden constituir violación a estos derechos. Asimismo, deberá destinar personal a la interposición de acciones legales y/o constitucionales en los casos en que las personas mayores sean víctimas de violaciones a los derechos humanos y al monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos de las personas mayores, especialmente de las que se encuentren en establecimientos de larga estadía para adultos mayores.”.

La **ministra Toro** indicó que la indicación fue aprobada por mayoría en la comisión de Hacienda, con 8 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. En cuanto al fondo, expresó que la propuesta que sostiene la indicación es un mecanismo de dar respuesta a los requerimientos ciudadanos y parlamentarios de una defensoría especializada en protección de derechos de personas mayores, fortaleciendo para ello al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sumado a un aumento en su personal.

La diputada **Del Real** (presidenta accidental) recordó que esta materia fue objeto de debate en el primer trámite reglamentario del proyecto, instancia que consideró que el INDH no era la institución que debía hacerse cargo de la protección de las personas mayores, debiendo tratarse en el proyecto de defensoría de las personas mayores, de autoría de la ex diputada Bulnes, quien buscaba la existencia de un organismo específico.

En el mismo sentido, agregó que existe un sector de la población que tiene desconfianza hacia el INDH.

El diputado **Guzmán**, por los mismos argumentos, anunció que votaría en contra. Además, lamentó que durante todos estos meses de tramitación el Ejecutivo no haya levantado una propuesta mejor, enfocada en el fortalecimiento de las

corporaciones de asistencia judicial, donde existe una demanda clara de los funcionarios de aumento de contratación de duplas psicosociales por causa.

Por último, considera un despropósito entregar nuevas facultades al INDH en circunstancias que existe un trabajo pendiente de una mesa presidencial para acordar una reorganización estructural de la misma.

En el mismo sentido, la diputada **Morales** anunció su voto en contra, principalmente porque existe ya en las Corporaciones de Asistencia Judicial un programa especializado en defensa, siendo aquel el servicio que debería ser fortalecido.

La diputada **Mix**, sobre el punto, recordó que las corporaciones estuvieron más de un mes en paro por la insuficiencia en personal para cubrir su demanda, dando cuenta del colapso del mismo. Por ello, considera que otorgar la labor de defensa a un servicio especializado, y no existiendo los recursos para crear una defensoría de personas mayores, consideró que el fortalecimiento del INDH es una opción factible, con presencia a nivel nacional. Por ello, anunció su voto a favor.

El diputado **Trisotti** anunció su voto en contra, habida consideración de que la principal demanda ciudadana de personas mayores es la creación de una defensoría especializada. Acto seguido, recordó los informes financieros en la materia, con un costo inicial de 228 millones, y en régimen más de 2.500 millones.

Por último, la diputada **Marzán** recordó la solicitud de la agrupación de personas mayores, especialmente del dirigente Domingo Vilos, de crear una defensa especializada. Reconociendo que no se ha alcanzado ese óptimo, la propuesta del Ejecutivo es mejor que nada, por lo que votará a favor.

El diputado **Melo** llamó a no “satanizar” las instituciones, invitando a abrazar la causa de avanzar en la protección efectiva de los derechos de las personas mayores. Sobre la crisis en la corporación de asistencia judicial, enunciada por el diputado Guzmán, indicó que tampoco existe voluntad política transversal para su fortalecimiento y aumento de recursos, siendo la derecha que se ha opuesto, considerando que solo se estaría – en sus palabras – “aumentando la grasa del Estado”, dando cuenta de una votación ideologizada, lamentando la situación.

La **ministra Toro** aclaró que esta indicación fue aprobada en Hacienda, por lo que no es menester del Ejecutivo insistir en la materia. Con todo, el proyecto contempla distintos fortalecimientos institucionales para proteger los derechos de las personas mayores, y el informe financiero al que hizo referencia el diputado Trisotti, pero no son 2.500 millones para el INDH, sino que se divide en tres: SENAMA, Corporación de Asistencia Judicial e INDH.

**Sometida a votación la indicación de la comisión de Hacienda, fue rechazada (3-4-0).** Votaron a favor las diputadas Carolina Marzán y Claudia Mix, y el diputado Daniel Melo. Votaron en contra, las diputadas Catalina del Real (presidenta) y Carla Morales, y los diputados Jorge Guzmán y Renzo Trisotti. No hubo abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 8, inciso segundo

(...)

“El Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho y, en especial, asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, teniendo en consideración un enfoque territorial, de género, de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas.”.

(...)

Indicaciones:

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, al inciso segundo para sustituirlo por el siguiente: **(Rechazado)**.

“El Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho y, en especial, asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, teniendo en consideración un enfoque territorial, de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas.”.

La ministra **Toro** indicó que la indicación elimina la referencia al “género” dentro del lista de enfoques. Consideró relevante mantener el texto actual, por respeto a la autonomía expresada.

El diputado **Melo** lamentó profundamente el intento del diputado Kaiser por eliminar la diversidad dentro del país, calificándola como una agenda regresiva y negacionista de la extrema derecha.

**Sometida a votación la indicación del H., diputado Kaiser, fue rechazada (2-5-0).** Votaron a favor la diputada Catalina del Real (presidenta accidental) y el diputado Renzo Trisotti. Votaron en contra las diputadas Carolina Marzán, Carla Morales y Claudia Mix, y los diputados Jorge Guzmán y Daniel Melo. No hubo abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

#### Artículo 14

“Artículo 14.- Ocio, deporte y vida activa. El Estado promoverá el bienestar, desarrollo personal y social de las personas mayores, a través del ocio, deporte y otras instancias que permitan su vida activa.

El Estado, a través del Ministerio del Deporte, y los demás órganos que correspondan, con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuando corresponda, desarrollará programas al efecto, los que podrán ser implementados por instituciones públicas o privadas, y por organizaciones de personas mayores, las que deberán ser parte del registro establecido en la letra g) del artículo 3° de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.”.

#### Indicación:

- De las diputadas Santibáñez, Pérez (Marlene), Pérez (Joanna), Rojas y Marzán, y de los diputados Beltrán, Sepúlveda, Trisotti, Von Mühlenbrock para reemplazar el artículo 14, por el siguiente: **[Aprobada]**.

“Artículo 14.- Ocio, deporte, vida activa y turismo. El Estado promoverá el bienestar, desarrollo personal y social de las personas mayores, a través del ocio, deporte, turismo y otras instancias que permitan su vida activa.

El Estado, a través del Ministerio del Deporte, y los demás órganos que correspondan, con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuando corresponda, desarrollará programas al efecto, los que podrán ser implementados por instituciones públicas o privadas, y por organizaciones de personas mayores, las que deberán ser parte del registro establecido en la letra g) del artículo 3° de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Respecto al turismo, el Estado, a través del Servicio Nacional de Turismo o del Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuando corresponda, propenderá al desarrollo de programas que permitan a las personas mayores la realización de viajes dentro del país con fines de esparcimiento, conocimiento, recreación y cultura.”.

La señora **Asmad** manifestó la relevancia de que el derecho de las personas mayores al deporte, al ocio y al turismo quede adecuadamente reflejado en la normativa en discusión. Señaló que dichos aspectos se encuentran subsumidos dentro del artículo 14 del proyecto, lo cual consideró positivo, aunque planteó la posibilidad de mejorar su redacción, siempre que el procedimiento legislativo lo permita.

Recalcó que su sector está plenamente comprometido con el fomento de estas actividades, ya que representan dimensiones fundamentales del bienestar y la calidad de vida en la vejez. En ese sentido, reiteró que el turismo se encuentra

considerado en el texto actual, pero estimó pertinente explorar mecanismos para explicitar aún más estos derechos en la formulación del artículo.

Sometida a votación la indicación de los diputados ya individualizados, **fue aprobada por unanimidad (9-0-0)**. Votaron a favor las/os diputadas/os Catalina del Real (presidenta accidental), Carolina Marzán, Carla Morales, Marlene Pérez, Joanna Pérez, Camila Rojas, Alexis Sepúlveda, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 20, inciso final

(...)

“Las acciones y medidas de apoyo y cuidado de la persona mayor que los órganos de la Administración del Estado y entidades privadas colaboradoras del Estado brinden a las personas mayores, sea que se ejecuten directamente o a través de terceros, deberán realizarse respetando la dignidad e integridad física y psíquica de la persona mayor, así como también el respeto de su autonomía, en condiciones de igualdad, considerando un enfoque preventivo, gerontológico, de género, de derechos humanos, de curso de vida, territorial, comunitario y biopsicosocial, que aborde tanto las necesidades de salud como sociales de las personas mayores.”.

Indicación:

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, al inciso final para sustituirlo por el siguiente: **(Rechazada)**.

“Las acciones y medidas de apoyo y cuidado de la persona mayor que los órganos de la Administración del Estado y entidades privadas colaboradoras del Estado brinden a las personas mayores, sea que se ejecuten directamente o a través de terceros, deberán realizarse respetando la dignidad e integridad física y psíquica de la persona mayor, así como también el respeto de su autonomía, en condiciones de igualdad, considerando un enfoque preventivo, gerontológico, de derechos humanos, de curso de vida, territorial, comunitario y biopsicosocial, que aborde tanto las necesidades de salud como sociales de las personas mayores.”.

La señora **Claudia Asmad**, directora de SENAMA, informó que la perspectiva de género es especialmente relevante para las políticas públicas de las personas mayores, ya que desde el 2022 se ha trabajado en un plan de diversidad sin exclusión. Por ello, esta indicación desconocería a las mujeres adultas mayores trans, lo que no condice con un trabajo en sociedad de forma integral.

Eliminarlo excluiría la posibilidad de generar orientaciones técnicas al respecto, afectando el trabajo de SENAMA que se ha realizado a la fecha. Recordó que durante muchos años la comunidad de minoría sexual de personas mayores han sido excluidas, pero como servicio tienen el rol y obligación de poner sobre la mesa esa diversidad de género.

**Sometida a votación la indicación del H., diputado Kaiser, fue rechazada (2-5-0).** Votaron a favor la diputada Catalina del Real (presidenta accidental) y el diputado Renzo Trisotti. Votaron en contra las diputadas Carolina Marzán, Carla Morales y Claudia Mix, y los diputados Jorge Guzmán y Daniel Melo. No hubo abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 23, inciso segundo

(...)

“Se entenderá que existe dependencia cuando, por razones derivadas de una o más condiciones de salud de origen física, mental o sensorial, la persona mayor requiera del apoyo de una o más personas para la realización de actividades de la vida diaria, sean estas básicas o instrumentales.”

(...)

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República, al inciso segundo para eliminarlo, readecuándose el orden de los incisos siguientes. **(Aprobado).**

La **ministra Toro** indicó que la supresión del inciso tiene su fuente en el hecho de que está contenido en el artículo 4, letra f), siendo innecesario reiterarlo, mejorando la técnica legislativa.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 28, numeral 3, párrafo quinto. Al artículo 102 Ñ

“Artículo 102 Ñ.- Objetivos del procedimiento. Este procedimiento tiene por objeto decretar medidas de protección en favor de personas mayores cuando la vulneración que les afecta sea constitutiva de abandono social.

Para los efectos de este procedimiento, se entenderá abandono social la definición señalada en el artículo 23 de la Ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, configurándose cuando:

- a) La víctima sea una persona mayor con dependencia que sufra una vulneración grave de sus derechos;
- b) Dicha vulneración grave de los derechos ponga en peligro la vida o integridad física o psíquica de la víctima; y,
- c) Dicha vulneración grave, además, haga suponer la falta de redes de apoyo familiar o social.

Para efectos de tener por acreditada la dependencia de la persona mayor, en los términos señalados en la letra a), se considerará que esta se configura cuando la persona mayor, por razones derivadas de una o más condiciones de salud de origen física, mental o sensorial, requiera del apoyo de una o más personas para la realización de actividades de la vida diaria, sean estas básicas o instrumentales.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República, al artículo 102 Ñ para eliminar el inciso tercero. **[Aprobada]**.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada sin mayor discusión por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 102 O

“Artículo 102 O.- Representación judicial. El tribunal velará porque los intereses de la persona mayor víctima de abandono social se encuentren debidamente representados, pudiendo designar a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que la víctima carezca de representante legal y/o existan indicios de que no puede procurarse debidamente dicha representación por sus propios medios.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República, al artículo 102 O para reemplazar la palabra “legal” por “judicial”. **(Aprobado).**

Al respecto, la **ministra Toro** refirió que la Corte Suprema observó que lo correcto es referirse a un representante judicial.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados

- - -

Al artículo 102 Q

“Artículo 102 Q.- Medidas cautelares. En cualquier momento del procedimiento o antes de su inicio, de oficio o a solicitud de las personas o instituciones indicadas en el artículo precedente, el tribunal podrá adoptar las siguientes medidas cautelares, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinente, por un máximo de noventa días, en el caso que sea necesario para proteger los derechos de las personas mayores:

a) Prohibir o limitar la entrada o presencia de ciertas personas en el hogar de la persona mayor. De adoptar esta medida, el tribunal deberá velar por el correcto resguardo de derechos y el bienestar de la persona mayor.

b) Autorizar el traslado de la persona mayor desde un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado a su domicilio, residencia o a un establecimiento de larga estadía, cuando así lo aconseje su médico tratante.

c) Autorizar el ingreso a un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, y sea indispensable para proteger la integridad física o psíquica de la persona mayor.

La resolución que imponga una o más medidas cautelares deberá fundarse en antecedentes suficientes que consten en el expediente de la causa, de los que se dejará expresa constancia en la misma resolución.

Para ello, el tribunal podrá ordenar la realización de evaluaciones médicas, psicológicas, sociales o las demás que considere necesarias. En la realización de estas evaluaciones deberán resguardarse siempre los derechos consagrados en la ley N° 20.584, que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con

acciones vinculadas a su atención de salud y las reglas establecidas en el Título III, de la ley N° 21.331, del Reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República a artículo 102 Q, para agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo: **[Aprobado]**

“Las medidas cautelares establecidas en los literales b) y c) del presente artículo serán dictadas por el tribunal resguardando siempre los derechos de las personas mayores establecidos en la presente ley, especialmente el derecho a la independencia y autonomía consagrado en el artículo 9, así como los demás derechos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, la Constitución Política de la República y las demás leyes.”.

La **ministra Toro** indicó que la indicación se refiere a dos medidas cautelares, esto es, la autorización del traslado de personas mayores desde el centro de tratamiento psiquiátrico y/o hospitalario hasta su domicilio o a un establecimiento de larga estadía, cuando así lo recomiende su médico tratando, y, por otro lado, la autorización al traslado hacia un establecimiento hospitalario y/o psiquiátrico cuando es indispensable para la protección de la persona.

Indicó que son medidas restrictivas de la libertad, y por tal, el tribunal al momento de dictar estas medidas cautelares, debe considerar especialmente sus derechos, especialmente el de la autonomía.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 102 R

“Artículo 102 R.- Audiencia preparatoria. El tribunal fijará la audiencia preparatoria dentro de los diez días siguientes a la presentación de la denuncia. A ella se citará a la persona mayor, a las personas a cuyo cuidado ésta se encuentre y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto. Asimismo, el tribunal podrá ordenar la ausencia de determinadas personas cuando existan antecedentes de que la comparecencia de éstas podría provocar una vulneración a la integridad psíquica de la persona mayor.

En esta audiencia, el tribunal podrá ordenar la realización de evaluaciones médicas, psicológicas, sociales o las demás que considere necesarias, de acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 102 Q.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez oídas las personas citadas, el tribunal, si contare con los elementos probatorios suficientes, podrá dictar sentencia definitiva en la misma audiencia. De lo contrario, examinados los antecedentes incorporados en la causa, fijará los puntos de prueba y citará a audiencia de juicio, la que deberá celebrarse dentro de un plazo máximo de 10 días contados desde la celebración de la audiencia preparatoria o desde la recepción de las evaluaciones solicitadas, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo de este artículo.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República al artículo 102 R, inciso primero para modificarlo en el siguiente sentido: **[Aprobado]**

a) Para intercalar, entre la expresión “para una acertada resolución del asunto” y el punto seguido que pasa ser aparte, la siguiente frase “y/o verse afectados por la dictación de una o más medidas de protección ordenadas en favor de la persona mayor”.

b) Para eliminar el párrafo “Asimismo, el tribunal podrá ordenar la ausencia de determinadas personas cuando existan antecedentes de que la comparecencia de éstas podría provocar una vulneración a la integridad psíquica de la persona mayor.”.

En el mismo sentido, el **Ejecutivo** indicó que, haciéndose cargo de una observación de la Corte Suprema, se hace cargo de la protección del principio de bilateralidad de la audiencia, que guarda relación con el derecho a defensa de quien pueda verse afectado por la resolución judicial. Por tanto, se eliminaría la facultad del tribunal, con la letra a) de la indicación.

Además, por lo mismo, se agrega el numeral b) de citar a las personas que puedan verse afectadas.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 102 S

“Artículo 102 S.- Audiencia de juicio. Esta audiencia tendrá por objeto recibir la prueba, en base a los puntos de prueba fijados en la audiencia preparatoria y decidir el asunto sometido a conocimiento del tribunal.

El tribunal podrá ordenar la comparecencia o ausencia de personas del grupo familiar de la persona mayor, en base a las mismas consideraciones referidas en el inciso primero del artículo 102 R.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República al artículo 102 S, inciso segundo para reemplazarlo por el siguiente: **(Aprobado)**.

“El tribunal citará a las personas cuya comparecencia se requiera de conformidad a lo dispuesto en el artículo 102 R.”.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada sin mayor discusión por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 102 T

“Artículo 102 T.- Sentencia definitiva. La sentencia definitiva se pronunciará sobre las medidas de protección a favor de la persona mayor, y podrá ordenar:

a) El pago de alimentos por parte de las personas del grupo familiar de la persona mayor, que sea necesaria tanto para su subsistencia como para su cuidado. Para estos efectos, se entenderán como parte del grupo familiar a las personas señaladas en los ordinales 1°, 2°, 3° y 4° del artículo 321 del Código Civil.

Para determinar el pago de los alimentos, el juez tendrá en consideración las reglas de prelación establecidas en el artículo 326 del Código Civil, así como las demás reglas pertinentes para la determinación de los alimentos que se encuentren señaladas en el Título XVIII del Código Civil.

Inmediatamente después de decretar los alimentos, el tribunal deberá ordenar de oficio a la entidad financiera correspondiente, la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación.

No se podrá ordenar el pago de esta pensión en los casos en que la persona mayor haya sido condenada por crímenes o simples delitos contra algún

miembro del grupo familiar, de aquellos enlistados en los numerales 1° a 4° del artículo 321 del Código Civil, además de los convivientes civiles.

Para tomar la decisión de otorgar el pago de los alimentos, el tribunal deberá tener en especial consideración el cumplimiento oportuno, por parte de la persona mayor, de las obligaciones relativas al derecho de alimentos respecto de sus hijos o hijas. Para ello, deberá verificar si la persona mayor se encuentra en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Los alimentos referidos en este literal tendrán el carácter de provisorios, y se continuarán devengando mientras se mantenga la vigencia de la medida de protección. El tribunal deberá decretar los alimentos por un plazo acotado, considerando el bienestar de la persona mayor.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia que fije estos alimentos, la persona mayor podrá presentar una demanda ante el juez de familia competente para que fije una pensión de alimentos definitiva. En dicho caso, el tribunal que conozca de la demanda podrá dejar sin efecto los alimentos provisorios que se hayan otorgado. En todo caso, la persona mayor no podrá demandar la fijación de una pensión de alimentos definitiva en contra de aquellas personas respecto de las cuales haya perdido el derecho a pedir alimentos.

El procedimiento señalado en el inciso anterior se tramitará conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 7, del decreto con fuerza de ley N° 1 del ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley N° 4.808, sobre registro civil, de la ley N° 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos, de la ley N° 16.618, ley de menores, de la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley N° 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.

b) La restitución material de bienes muebles o inmuebles a la persona mayor, en aquellos casos en que, esta pueda acreditar la plena propiedad o el usufructo sobre dichos bienes, y los requeridos no tengan la tenencia o posesión legítima sobre los mismos.

c) El ingreso de la persona mayor en establecimientos que desarrollen programas especializados para personas mayores.

d) La derivación a programas públicos dirigidos a personas mayores.

e) Otras medidas que cautelen la vida y la integridad física y psíquica de la persona mayor.

Para dictar sentencia, el tribunal podrá ordenar la realización de evaluaciones médicas, psicológicas, sociales o las demás que considere necesarias, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 102 Q.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República, al artículo 102 T para modificarlo en el siguiente sentido: **(Aprobado)**.

a) Para eliminar el literal a), readecuándose el orden de los literales siguientes.

b) Parta agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo, a ser tercero:

“Las medidas de protección contenidas en el presente artículo serán dictadas por el tribunal resguardando siempre los derechos de las personas mayores establecidos en la presente ley, especialmente el derecho a la independencia y autonomía consagrado en el artículo 9, así como los demás derechos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, la Constitución Política de la República y las demás leyes.”.

Respecto al literal a) de la indicación, la **ministra Toro** indicó que haciendo eco del informe de la Corte Suprema, el pago de alimentos ya se encuentra regulado en el Código Civil, con sus propios procedimientos, no siendo justificado general un régimen especialísimo que no toma en consideración las reglas generales del mismo, pudiendo inclusive generar una confusión normativa de la naturaleza provisoria de los alimentos.

El diputado **Trisotti** puntualizó que la idea del legislador era explicitarlo en esta norma sobre el derecho de alimentos, sin el ánimo de ser redundantes, y solo para efectos de dejar en claro la defensa del derecho de alimentos de las personas mayores.

Sobre la letra b), la **ministra Toro** indicó que la indicación tiene el mismo sentido de encontrar el balance entre la protección de los derechos de personas mayores y el respeto por la autonomía de las mismas.

**Sometida a votación la indicación letra a), de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

**Sometida a votación la indicación letra b), de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Al artículo 102 V

“Artículo 102 V.- Entrega de información sobre oferta programática del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Con el objeto de que el tribunal pueda contar con antecedentes suficientes y actualizados para dictar las medidas de protección que se disponen en este Párrafo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor informará semestralmente y en forma detallada a cada juzgado de familia la oferta programática vigente en la respectiva región. En particular, la información entregada deberá referirse a la modalidad de intervención de la oferta y la cobertura existente, sea en sus centros o programas de administración directa o bien en los programas o proyectos ejecutados por otros organismos.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República al artículo 102 V para reemplazar la frase “informará semestralmente y en forma detallada a cada juzgado de familia la oferta programática vigente en la respectiva región. En particular, la información entregada deberá referirse a la modalidad de intervención de la oferta y la cobertura existente, sea en sus centros o programas de administración directa o bien en los programas o proyectos ejecutados por otros organismos” por “deberá informar en los términos dispuestos en el literal e) del artículo 5 bis de la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor”. **(Aprobado)**.

La **ministra Toro** aclaró que, manteniendo el espíritu, SENAMA informará a los tribunales sobre las ofertas programáticas, pero ahora simplificándolo, para no mantener una doble obligación al servicio.

El diputado **Trisotti** consultó al ejecutivo si SENAMA, frente a un nuevo programa que nace luego de ya haberse informado a tribunales del plan anual, debe volver a informar.

En respuesta, la **ministra Toro** indicó que en este caso no se modifica el artículo letra e) vigente de la ley de SENAMA, sino del artículo 5 bis que se incorpora. Con todo, la indicación 26 se propone acortar el plazo de un año a cada cuatro meses, por lo que los tribunales mantendrán su base de información siempre actualizada.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (7-0-0).** Votaron a favor las y los diputados Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Daniel Melo, Carla Morales, Claudia Mix y Renzo Trisotti. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

#### Artículo 29

##### “Párrafo II

##### De la Protección Laboral de los Trabajadores Adultos Mayores

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

1. Incorpórase el siguiente Capítulo XI en el Título II del Libro I, que reza como sigue:

#### Capítulo XI

##### Del contrato del trabajador persona mayor

Artículo 152 quinquies J.- Ámbito de aplicación. Se podrá regir por las normas de este capítulo el contrato individual que el trabajador persona mayor celebre con el empleador. Para estos efectos, se considerará trabajador persona mayor a toda persona que cumpla el requisito de edad establecido en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.828, que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Artículo 152 quinquies K.- Compatibilidad de las funciones con la salud del trabajador persona mayor. Las funciones del trabajador persona mayor pactadas en el contrato de trabajo deberán ser compatibles con su condición física y sus capacidades, considerando los requerimientos de dichas funciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 184.

Artículo 152 quinquies L.- Duración y distribución de la jornada de trabajo. Bajo esta modalidad de contratación, la jornada de trabajo estará sujeta al límite semanal establecido en el inciso primero del artículo 22 y al límite diario establecido en el inciso segundo del artículo 28, ambos de este Código.

Las partes podrán distribuir la jornada ordinaria señalada en el inciso anterior, de acuerdo a una de las siguientes alternativas:

a) Jornada con bandas horarias. El contrato podrá contener una o más bandas horarias, con horarios diferidos de entrada y de salida.

Si las partes acordaren diferentes bandas horarias, el trabajador persona mayor tendrá la facultad de optar, unilateralmente, por cualquiera de aquéllas, indicándose en el contrato la anticipación del aviso del cambio de banda y la cantidad de veces en el mes que el trabajador persona mayor podrá hacer uso de esta facultad. En caso que nada se señale en el contrato, se entenderá que el trabajador persona mayor no requerirá de anticipación del aviso, ni tendrá limitación en la cantidad de veces al mes que podrá hacer uso de esta facultad.

b) Jornada de libre elección horaria. La jornada convenida por las partes se podrá distribuir como libremente escoja el trabajador persona mayor, pero considerando que el cumplimiento de sus obligaciones deberá realizarse dentro del horario de funcionamiento de la empresa o establecimiento, o dentro del rango horario que libremente elijan las partes, y conforme a la naturaleza de sus funciones.

La elección de la alternativa de distribución de jornada, ya sea con bandas horarias o de libre elección, deberá constar por escrito y estará vigente mientras no se pacte una nueva opción. Esta elección podrá fundarse, entre otras, en la naturaleza de las funciones, la condición física o de salud del trabajador persona mayor, su situación familiar, la distancia de su domicilio, o bien, diferentes jornadas en invierno o verano.

Por su parte, cuando la naturaleza de las funciones a desarrollar o la condición física del trabajador persona mayor lo aconsejen, éste podrá regirse por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22, lo que deberá consignarse en el contrato de trabajo.

En cualquier caso, la prestación de servicios deberá considerar las reglas generales de descansos diario y semanal establecidas en este Código.

La duración y distribución de la jornada de trabajo, la oferta original del contrato y la remuneración pactada en él, no podrá ser alterar ni modificada unilateralmente, salvo acuerdo expreso de las partes, y siempre velando por el interés de la persona mayor en su calidad de trabajador.

Artículo 152 quinquies M.- Feriado Anual. El trabajador persona mayor podrá hacer uso anticipado de su feriado anual y de forma proporcional a los días devengados, a partir del séptimo mes contado desde el inicio de la prestación de servicios. En estos casos, no se aplicará la regla del fraccionamiento establecida en el inciso primero del artículo 70 de este Código.

Artículo 152 quinquies N.- Contratación previa a tener la calidad de trabajador persona mayor. Los trabajadores que adquieran la calidad de trabajador

persona mayor durante la vigencia del contrato de trabajo, continuarán rigiéndose por los términos y condiciones del contrato de trabajo que se encontrare vigente con anterioridad a adquirir la mencionada calidad, salvo que las partes acuerden acogerse a las normas de este capítulo.”.

2. Agrégase un numeral 7 al artículo 159, del siguiente tenor:

7.- Cuando estando vigente un contrato indefinido por más de dos años y sea aceptada la solicitud de Jubilación del Trabajador que no desee continuar prestando servicios a su empleador, reciba su correspondiente certificado de saldo.

En los casos aplicables a esta causal de término de contrato, el trabajador, tendrá derecho a ser indemnizado en los términos del inciso segundo del artículo 163, con un límite máximo de ciento veinte días de remuneración. La indemnización a la que tendrá derecho el trabajador, no será incompatible con ninguna otra a la que el trabajador pudiera tener derecho.”.

3. Intercálase el siguiente artículo 162 bis, del siguiente tenor:

Artículo 162 bis.- En los casos que el contrato de trabajo termine de acuerdo con la causal del numeral 7 del artículo 159, el trabajador deberá comunicar de esta circunstancia personalmente o por carta certificada al empleador. Cuando la comunicación sea por carta certificada, esta, deberá ser enviada al domicilio señalado en el contrato, con copia a la inspección del trabajo respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción por parte del trabajador de su correspondiente certificado de saldo, que permita acreditar la aceptación de la jubilación solicitada. La mencionada carta deberá expresar la circunstancia de haberse cumplido la mencionada causal.”.

Indicaciones (2):

- De S.E. el Presidente de la República, *para suprimir el artículo 29, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes.* **[Rechazado]**.

La **ministra Toro** insistió en la postura original del Ejecutivo de considerar un error incorporar un contrato especial para adultos mayores. Entendida la buena intención de la propuesta parlamentaria, es un riesgo de precarización del trabajo de personas mayores, siendo regresivo y discriminatorio en cuanto a los derechos laborales, siendo grave cuando se puntualiza hacia una población especialmente delicada.

En su experiencia, la creación de contratos especiales en Chile se presta para el menoscabo de derechos que son, en su naturaleza, irrenunciables, olvidando la relación asimétrica en el derecho laboral entre empleador y trabajador.

La diputada **Del Real** (presidenta accidental) recordó que una de las demandas ciudadanas mayoritarias, luego de la ley de 40 horas, es contar con un contrato de trabajo especial, flexible, con la idea de poder reincorporarse al mundo laboral en horarios y condiciones que les son más convenientes.

El diputado **Melo** solicitó no generalizar el debate ni ser el portavoz de los adultos mayores, solicitando al ejecutivo abrirse a una alternativa en la materia, porque efectivamente es una demanda social, como también que se puede incurrir en abusos en contra de personas mayores por parte de empleadores.

En respuesta, la ministra Toro indicó que las políticas del Gobierno van acorde a mejorar condiciones materiales que permita mejorar la posición laboral de las personas mayores, y en ese sentido existen planes y programas de formación que les permiten adquirir conocimiento de ejercicio adecuado de derechos laborales, en razón de la posibilidad de pactar jornadas reducidas de trabajo conforme a las actuales normas del contrato de trabajo.

Por último, en caso de ser rechazada la propuesta de supresión, indicó que la propuesta de los diputados Giordano y la diputada Fries puede satisfacer ese estándar.

El diputado **Guzmán** consideró que la indicación era improcedente, toda vez que el proyecto fue aprobado el 2019 en el Senado, con la fusión de tres proyectos, dos de los cuales proponen, en su idea matriz, un estatuto laboral especial.

Agregó que, durante su participación en un conversatorio en La Moneda sobre derechos de personas mayores, refirió que una de las tres primeras demandas era el de contrato de trabajo

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue rechazada (3-5-0).** Votaron a favor las diputadas Carolina Marzán y Claudia Mix, y el diputado Daniel Melo. Votaron en contra las diputadas Catalina del Real (presidenta accidental), Carla Morales y Joanna Pérez, y los diputados Jorge Guzmán y Renzo Trisotti. No hubo abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- De la diputada Lorena Fries Monleón y del diputado Andrés Giordano Salazar, para reemplazarlo por el siguiente: **(Rechazada)**.

“Artículo 29.- Incorpórase el siguiente artículo 184 ter en el Código del Trabajo, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

“Artículo 84 ter.- El empleador deberá, sólo a requerimiento del trabajador o trabajadora que haya alcanzado la edad establecida en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.828, evaluar la posibilidad de realizar ajustes razonables a las

condiciones de trabajo, tales como la adecuación de horarios, funciones o modalidad de prestación de servicios, cuando ello sea necesario para compatibilizar el desempeño laboral con su salud, capacidades o situación personal o familiar.

Dichos ajustes deberán implementarse de común acuerdo y sin que impliquen una disminución de derechos o condiciones contractuales previamente adquiridas, ni constituir discriminación por motivo de edad. Si el trabajador o la trabajadora se encontrara afiliadas a una organización sindical, dicho acuerdo deberá contar con su colaboración.”.

**Sometida a votación la indicación de los diputados Giordano y Fries, fue rechazada (3-6-0).** Votaron a favor las diputadas Carolina Marzán y Camila Rojas, y el diputado Alexis Sepúlveda. En contra, las/os diputadas/os Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Juan Carlos Beltrán, Marlene Pérez, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock.

- - -

Artículo 31, Numeral 3, Letra P

“Artículo 31.- Modifícase la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en los siguientes términos:

3) Incorpóranse, en el artículo 3°, las siguientes letras m), n), o) y p), nuevas:

p) Solicitar datos estadísticos relevantes en materia de personas mayores y envejecimiento, con enfoque de género e intercultural, a las distintas instituciones públicas.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República, al literal p) propuesto para reemplazarlo por el siguiente: **[Aprobada]**.

“p) Solicitar datos estadísticos relevantes en materia de personas mayores y envejecimiento a las distintas instituciones públicas, en el marco de esta ley. Estos datos podrán solicitarse desagregados de conformidad con las variables que el Servicio considere pertinentes, tales como: tramos etarios, sexo, patologías, distinción entre zonas rurales o urbanas, diferencias por región, provincia o comuna, entre otras.”.

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, al literal p), propuesto, *para reemplazarlo por el siguiente:* **[Rechazo Reglamentario]**.

“p) Solicitar datos estadísticos relevantes en materia de personas mayores y envejecimiento a las distintas instituciones públicas.”

La **directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Claudia Asmad**, informó que la indicación del Ejecutivo obedece a una de las observaciones levantada por la Corte Suprema, quien sugiere no redundar en la norma, puesto que ya el artículo tercero letra p) de SENAMA contempla esta misma facultad.

**Sometida a votación la indicación S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (9-0-0).** Votaron a favor las/os diputadas/os Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Carla Morales, Marlene Pérez, Camila Rojas, Alexis Sepúlveda, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

En consecuencia, la indicación del diputado Kaiser, es rechazada por ser incompatible con lo ya aprobado (art. 206, inciso tercero del Reglamento).

- - -

Artículo 31, Numeral 4)

“Artículo 31.- Modifícase la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en los siguientes términos:

4) Agréganse, en el artículo 5°, las siguientes letras g), h), i), j), y k) del siguiente tenor:

“g) Elaborar la Política Nacional de Envejecimiento, la que deberá ser aprobada por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia y por el Presidente de la República.

h) Elaborar el plan estratégico para las personas mayores, el cual deberá ser informado al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, establecido en el artículo 16 bis A de la ley N° 20.530 que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, así como también del estado de su implementación.

i) Velar por el cumplimiento de los acuerdos e instrucciones en materia de vejez y envejecimiento que adopte el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, establecido en la ley N° 20.530.

j) Informar anualmente al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, establecido en la ley N° 20.530, acerca del cumplimiento de las decisiones adoptadas por éste.

k) Solicitar datos estadísticos relevantes en materia de personas mayores y envejecimiento a las distintas instituciones públicas que los elaboren, en el marco de esta ley. Estos datos podrán solicitarse desagregados de conformidad con las variables que el Servicio considere pertinentes, tales como: tramos etarios, sexo, patologías, distinción entre zonas rurales o urbanas, diferencias por región, provincia o comuna, entre otras.”.

Indicaciones:

- De S.E. el Presidente de la República:

a) Para reemplazar la expresión “j) y k)”, por “y j)”. **[Aprobada]**.

b) Para eliminar el literal k) **(Aprobada)**.

La señora **Asmad** refirió que es una adecuación formal a una atribución que se espera no replicar o redundar de forma innecesaria, según propia recomendación de la Corte Suprema.

**Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por unanimidad (9-0-0).** Votaron a favor las/os diputadas/os Catalina del Real (presidenta accidental), Jorge Guzmán, Carolina Marzán, Carla Morales, Marlene Pérez, Camila Rojas, Alexis Sepúlveda, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Artículo 31, Numeral 5)

“Artículo 31.- Modifícase la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en los siguientes términos:

5) Intercálase el siguiente artículo 5° bis:

“Artículo 5° bis.- En cada región del país existirá una Dirección Regional del Servicio, a cargo de un funcionario con la denominación de Director Regional. A los Directores Regionales les corresponderán las siguientes funciones y atribuciones:

a) Ejecutar las políticas y planes fijados por el Servicio en la respectiva región, de acuerdo a las instrucciones que les imparta el Director Nacional.

b) Coordinar las políticas públicas y planes que conciernan a las personas mayores, ejecutados por los distintos órganos de la Administración del Estado a nivel regional.

c) Ejercer la secretaría ejecutiva del Comité Regional para el Adulto Mayor establecido en el artículo 12°.

d) Fomentar la participación social de las organizaciones de y para las personas mayores en la gestión de las políticas públicas en la respectiva región.

e) Informar, semestralmente, a la o las Cortes de Apelaciones que corresponda, la oferta de programas para personas mayores y los cupos disponibles en la región, así como las instituciones públicas y privadas con las que haya celebrado convenios, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3 letra o).

f) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el Director Nacional les delegue o que las leyes les asignen.”.

Indicación:

- De S.E. el Presidente de la República, al artículo 5° bis, propuesto, literal e), para reemplazar la palabra “semestralmente” por la frase “cada cuatro meses”.  
**[Aprobada].**

La señora **Asmad** recordó que en sesión N° 108, la ministra Toro explicó que la información que el Gobierno transmitirá a los tribunales de justicia se acorta, pasando de un informe semestral a uno cada cuatro meses. Así, la oferta programática estará siempre actualizada y a disposición de las cortes de apelaciones respectivas, como también los grupos disponibles por región y las instituciones públicas y privadas con las que hayan celebrado convenios de acuerdo con lo señalado en el artículo 3 de la letra O.

Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, **fue aprobada por unanimidad (8-0-0)**. Votaron a favor las/os diputadas/os Catalina del Real (presidenta accidental), Carolina Marzán, Carla Morales, Marlene Pérez, Camila Rojas, Alexis Sepúlveda, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Artículo 31, Numeral 6)

“6) Artículo 5° ter. - Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores. Créanse los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores, en adelante, los Consejos, como organismos asesores del Servicio Nacional del Adulto Mayor, a través de las Direcciones Regionales. Existirá un Consejo en cada región, la protección de sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía activa, entre otras.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará los requisitos para ser consejero, la forma de elección de sus representantes y los criterios de participación de los diferentes tipos de organizaciones de cada región, respetando criterios de paridad de género y participación sin discriminación. Asimismo, corresponderá al reglamento fijar las normas generales de funcionamiento de los Consejos y las causales de cesación en el cargo de los consejeros.

Los Consejos no podrán estar formados por más de veinte ni por menos de diez representantes, de acuerdo con la población de personas mayores de cada región.”.

Indicación:

- Del diputado Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen al artículo 5° ter, propuesto para sustituir el inciso segundo por el siguiente: **[Aprobada]**.

“Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará los requisitos para ser consejero, la forma de elección de sus representantes y los criterios de participación de los diferentes tipos de organizaciones de cada región, respetando criterios de participación en igualdad de condiciones. Asimismo, corresponderá al reglamento fijar las normas generales de funcionamiento de los Consejos y las causales de cesación en el cargo de los consejeros.”.

La directora nacional de Senama, **señora Asmad**, señaló que, tal como lo manifestó la ministra en la jornada anterior, resulta fundamental incorporar el enfoque de género en las políticas dirigidas a personas mayores. Reafirmó que dicha perspectiva permite abordar adecuadamente la heterogeneidad de la vejez, lo que resulta indispensable para construir un país que esté efectivamente preparado para acoger la diversidad de trayectorias, condiciones y experiencias que configuran las distintas vejezes.

Enfatizó que esta inclusión no implica generar privilegios, sino considerar las múltiples dimensiones que conforman la realidad de las personas mayores en Chile, lo que constituye una expresión concreta de inclusión. Por tal motivo, destacó la importancia de mantener la noción de género como categoría analítica dentro del diseño de políticas públicas, particularmente en el levantamiento de datos y diagnóstico, elementos clave para una intervención eficaz.

Finalizó agradeciendo a la directora y reiterando el valor de incorporar esta perspectiva en la formulación de acciones y respuestas institucionales.

La diputada **Rojas** expresó su rechazo a la indicación en discusión, señalando que, si bien el tema ya había sido debatido anteriormente en la comisión, consideró pertinente reiterar su postura, especialmente ante la reapertura del debate.

Indicó que resulta plenamente justificado incorporar estudios específicos con enfoque de género, particularmente en el ámbito estadístico, ya que dicha perspectiva permite una mejor comprensión de las realidades diferenciadas que enfrentan las personas mayores y otros grupos poblacionales.

Afirmó que la prohibición de incluir un componente de género en las investigaciones y en los análisis estadísticos carece de fundamento técnico, y constituye una manifestación de una visión ideologizada que, en su opinión, lleva la discusión a un extremo innecesario. Subrayó que esta restricción no tiene sentido desde la lógica del diseño de políticas públicas basadas en evidencia, y que limitar esa capacidad de análisis sólo empobrece las decisiones institucionales.

Por tales razones, anunció su voto en contra de la indicación, reafirmando con convicción la necesidad de defender herramientas técnicas que permitan visibilizar las desigualdades y construir políticas más inclusivas.

Sometida a votación la indicación del diputado Kaiser, **fue aprobada por mayoría (5-4-0)**. Votaron a favor las/os diputadas/os Catalina del Real (presidenta accidental), Juan Carlos Beltrán, Marlene Pérez, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock. Votaron en contra, Carolina Marzán, Joanna Pérez, Camila Rojas y Alexis Sepúlveda. No hubo abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

#### Artículo 32

“Artículo 32.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 33 de la ley N° 18.833, que establece un nuevo Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), sustitutivo del actual contenido en el decreto con fuerza de ley N° 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Cuando en una Caja de Compensación, la cantidad de pensionados afiliados sea igual o mayor al 20% del total de sus trabajadores y pensionados, el directorio estará integrado por trabajadores, empleadores y pensionados, en la proporción que fijen sus estatutos.

En aquellas Cajas de Compensación en las que dicho porcentaje sea menor al porcentaje indicado en el inciso anterior, sus estatutos podrán determinar la incorporación de un pensionado, la que no alterará de manera alguna el número total de directores.”.

Indicación:

- De S.E. el Presidente de la República para suprimirlo, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes. **[Aprobada]**.

El señor **Fernando Carvalho, jefe legislativo del ministerio de Desarrollo Social y Familia**, recordó que esta indicación se relaciona con una conversación sostenida previamente en el marco de esta misma comisión, ocasión en la cual se contó con la presencia del Subsecretario de Previsión Social. Indicó que dicha discusión se produjo luego de que la indicación en cuestión ya hubiese sido votada, en el contexto de la explicación de otro punto.

Explicó que el subsecretario abordó en esa instancia las complejidades que actualmente enfrentan los directorios de las cajas de compensación, así como la precariedad en su marco regulatorio. Agregó que esta preocupación fue posteriormente reiterada en la Comisión de Hacienda, donde diversos parlamentarios manifestaron inquietudes expresadas tanto por los propios directores de las cajas como por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSES), respecto a los posibles efectos de la modificación propuesta.

Precisó que uno de los principales cuestionamientos apunta a que esta reforma implicaría una disminución en la participación de los trabajadores en dichos directorios, lo cual podría tensionar aún más su funcionamiento, que ya presenta dificultades operativas relevantes. Recordó que, de acuerdo con lo señalado por el subsecretario, los directorios actualmente operan principalmente bajo instrucciones administrativas emitidas por la SUSES, lo que refuerza la necesidad de una reforma más integral al sistema.

En virtud de lo anterior, planteó que la posición de su sector es no innovar en esta materia en esta oportunidad, sin perjuicio de avanzar a futuro en una revisión más profunda y estructural del funcionamiento de los directorios de las cajas de compensación.

Acto seguido, la diputada **Marzán** consultó al ejecutivo sobre estadísticas de participación actual de pensionados en las cajas de compensaciones, atendido que la indicación hace mención al 20% del mismo, sin que se conozcan los números reales de personas mayores que participan en ellas.

La diputada **Marlene Pérez** compartió con la comisión un informativo sobre esta materia, y que procedió a dar lectura en el siguiente sentido:

“¿Por qué el Ejecutivo frena la incorporación de pensionados?”

Al gobierno corporativo directorio de las cajas, si ellos pagan una comisión de un 1% de su pensión, y los trabajadores activos no contribuyen.

No hay ningún fundamento para que el Ejecutivo cambie de apreciación, ya que son las cajas las entidades de previsión social que mayor foco pueden definir en los programas y servicios que desarrolle, un beneficio de sus afiliados en materia de bienestar, envejecimiento activo, fomento de salud física y mental, desarrollo de relaciones sociales, desarrollo y fomento de pequeños emprendimientos”.

Al respecto, manifestó su preocupación sobre la materia, y la poca información que manejan durante el debate.

El señor **Carvallo** señaló que, mediante la presente indicación, la intención de su sector es no innovar en esta materia, atendidas las complejidades existentes en el funcionamiento actual de los directorios de las cajas de compensación, así como la escasa regulación que los rige. Explicó que la propuesta de modificación que se pretende introducir podría generar mayores dificultades en la integración y composición de dichos directorios, tensionando aún más un sistema que ya opera en condiciones precarias.

Aclaró que esta postura no implica oposición a incrementar la participación de las personas mayores en instancias de representación, sino que responde a la convicción de que dicho objetivo debe abordarse mediante una reforma estructural más amplia al régimen normativo de las cajas de compensación y al funcionamiento de sus órganos directivos.

Reiteró que se trata de una situación que amerita una revisión integral, de manera de evitar que una modificación aislada y puntual termine entorpeciendo aún más el trabajo que desarrollan estos directorios, los cuales ya enfrentan múltiples dificultades operativas.

Sometida a votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, **fue aprobada (8-0-1)**. Votaron a favor las/os diputadas/os Catalina del Real (presidenta accidental), Carolina Marzán, Carla Morales, Joanna Pérez, Camila Rojas, Alexis Sepúlveda, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock. No hubo votos en contra. Se abstuvo la diputada Marlene Pérez. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

#### Artículos Segundo Transitorio

“Artículo segundo.- Los Consejos Asesores Regionales de las Personas Mayores a que hace referencia el artículo 5° ter de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, incorporado a dicha norma por el numeral 6) del artículo 25 de esta ley serán los continuadores legales de los Consejos Asesores

Regionales de Personas Mayores creados mediante el decreto supremo N° 8, de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.”.

Indicación:

- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar en el artículo segundo transitorio el guarismo “25” por “32”. **(Aprobada)**.

El Ejecutivo, a través de la señora **Asmad**, aclaró que es una mera corrección formal, necesaria.

Sometida a votación la indicación N° 28, de S.E. el Presidente de la República, **fue aprobada por unanimidad (9-0-0)**. Votaron a favor las/os diputadas/os Catalina del Real (presidenta accidental), Carolina Marzán, Carla Morales, Marlene Pérez, Joanna Pérez, Camila Rojas, Alexis Sepúlveda, Renzo Trisotti y Gastón Von Mühlenbrock. No hubo votos en contra ni abstenciones. No hubo diputados inhabilitados.

- - -

Artículo Sexto Transitorio

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con reasignaciones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.”.

Indicación:

- De S.E. el Presidente de la República para agregar el siguiente artículo sexto transitorio, nuevo, pasando el actual artículo sexto transitorio a ser artículo séptimo transitorio y así sucesivamente: **(Rechazo Reglamentario)**.

“Artículo sexto transitorio.- El Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá informar semestralmente a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados y Diputadas, y a la Comisión del Senado que corresponda, las medidas implementadas y acciones judiciales y/o administrativas interpuestas en favor de las personas mayores, en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley.

El referido informe deberá publicarse en el sitio electrónico de dicho instituto.

El primer informe deberá ser enviado por dicho instituto en el plazo máximo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.”.

La diputada **Del Real (presidenta accidental)** manifestó que la indicación N° 29 y la 30 son incompatibles, toda vez que ya se rechazó la idea de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tuviese competencia en materia de defensa de derechos de personas mayores y ambas indicaciones hacen referencia a dicho instituto, en materia presupuestaria, procediendo a rechazarlo reglamentariamente por ser incompatible con lo ya aprobado por la comisión.

- De la Comisión de Hacienda para reemplazar el artículo sexto transitorio por el siguiente: **(Rechazado reglamentariamente)**.

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respectivamente, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

- - -

#### Artículo Séptimo Transitorio

“Artículo séptimo.- En el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá dictar los nuevos reglamentos, en conformidad con las disposiciones de la presente ley. Lo anterior no impide exigir el cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta ley.”.

- - -

### **VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN**

#### PROYECTO DE LEY

#### LEY INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES Y DE PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE

#### TÍTULO PRELIMINAR OBJETO, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS

Artículo 1.- Objeto. El objeto de esta ley es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Ninguna de las disposiciones de esta ley podrá constituirse o interpretarse como una limitación al ejercicio de derechos garantizados por el derecho internacional o la legislación interna nacional.

Artículo 2.- Principales obligados por esta ley. El Estado, con participación de las comunidades, las familias y las personas mayores, tienen el deber de respetar, proteger y promover el ejercicio y goce de los derechos de las personas mayores, en igualdad de condiciones con el resto de la población. Deberán promover el envejecimiento digno, activo y saludable de todas las personas, y la integración activa, bienestar y participación en la comunidad de las personas mayores.

Artículo 3.- Principios. La interpretación y aplicación de esta ley deberá hacerse de conformidad con los principios consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, son principios generales de la presente ley:

a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.

b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo.

c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.

d) La igualdad y no discriminación arbitraria.

e) La participación, integración e inclusión intergeneracional plena y efectiva en la sociedad.

- f) El bienestar y cuidado.
- g) La seguridad física, económica y social.
- h) La autorrealización.
- i) La equidad e igualdad de género.
- j) Enfoque de curso de vida.
- k) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
- l) El buen trato y la atención preferencial.
- m) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.
- n) El respeto y valorización de la diversidad cultural.
- ñ) El acceso igualitario y efectivo a la justicia y la protección judicial efectiva.
- o) La pertenencia territorial.
- p) El acceso a la educación.
- q) La progresividad y la no regresión de los derechos.

Artículo 4.- Conceptos. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

a) Persona mayor: toda persona con sesenta años y más, en conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este concepto incluye el de adulto mayor y el de adulto mayor de la cuarta edad, que corresponde a las personas con ochenta años y más. Toda referencia en leyes, reglamentos y demás normativa vigente a estas expresiones deberá entenderse efectuada a persona mayor.

b) Envejecimiento: proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que supone cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas

consecuencias, que están asociados con interacciones dinámicas y constantes entre el individuo y su entorno.

c) Vejez: última etapa del curso de vida del ser humano.

d) Envejecimiento digno, activo y saludable: proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar, de participación y protección de las personas, con el fin de promover la dignidad y autonomía en la vejez, ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todas las personas. Este concepto se aplica tanto a individuos como a grupos de población.

e) Cuidado integral: atención de las necesidades centradas en las personas, en las áreas físicas, materiales, biológicas, mentales, espirituales, sociales, económicas, laborales y productivas de las personas mayores, en consideración a sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias.

f) Persona mayor con dependencia: aquella que, por razones derivadas de una o más condiciones de salud de origen física, mental o sensorial, requiere de cuidados de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria y participar de la sociedad.

g) Discriminación por edad en la vejez: cualquier distinción, exclusión o restricción arbitraria basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular, restringir o desconocer el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política y social, económica cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

h) Organizaciones promotoras del envejecimiento digno, activo y saludable: todos aquellos servicios públicos e instituciones, sean éstas públicas, privadas u organizaciones de la sociedad civil, encargadas de promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas que entreguen servicios orientados a fomentar el envejecimiento digno, activo y saludable de las personas mayores, su autonomía, independencia y participación, respetando los derechos de las personas mayores.

i) Enfoque de curso de vida: se entenderá como el continuo de la vida de la persona, desde el inicio de su existencia hasta su última etapa, que, condicionada por factores, tales como el familiar, social, económico, ambiental y/o cultural, configuran su situación vital, siendo el Estado el encargado de desarrollarlo en sus políticas públicas, planes y programas, enfatizando en el bienestar de la vejez.

j) Personas mayores en situación de desventaja: aquellos que, debido a diversos factores relacionados con su entorno o situación, como la falta de acceso a la tecnología, la conectividad, la seguridad personal o su ubicación geográfica, requieren el acompañamiento, ayuda o asistencia de otra persona para llevar a cabo determinadas actividades, en resguardo de sus necesidades y para el adecuado desarrollo de su dimensión social. Además, para los aspectos no contemplados en esta normativa, se aplicará lo establecido en el artículo 2, numeral 3, de la Ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en relación con personas o grupos en situación de desventaja.

## TÍTULO I

### DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y ACCIONES DEL ESTADO

Artículo 5.- Igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez. Las personas mayores tienen derecho a gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

El Estado y sus organismos promoverán la erradicación de la discriminación arbitraria por edad en la vejez, especialmente, en el ámbito de la salud, educación, seguridad social, empleo, comunicaciones, tecnología digital, servicios financieros, acceso a la justicia, vivienda, cultura, deporte y recreación.

Con el fin de proteger este derecho, el Estado establecerá enfoques específicos en sus políticas, planes y programas, sobre envejecimiento y vejez, especialmente respecto de aquellas personas mayores que son víctimas de discriminación arbitraria.

Todo acto de discriminación arbitraria por edad contra las personas mayores en la vejez, podrá ser denunciado y será sustanciado de conformidad a las reglas contenidas en el Título II de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

Artículo 6.- Derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente. Las personas mayores tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todas las áreas de su vida.

Los órganos del Estado y el sector privado deberán propender al establecimiento de canales de atención preferente y oportunos para las personas mayores en sus establecimientos, oficinas de atención al público, así como en sus plataformas digitales de atención. Asimismo, deberán velar por el uso de lenguaje claro, simple y adecuado, en el trato a las personas mayores.

En caso de que un proveedor, de acuerdo con la definición proporcionada por la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, cometa una infracción a lo anteriormente mencionado, se considerará una violación específica del derecho a la no discriminación arbitraria, según lo establecido en el artículo 3° letra c) de dicho cuerpo normativo. Esto, sin perjuicio de los derechos que asisten a las personas mayores en calidad de consumidores.

Artículo 7.- Acceso a la justicia. Para resguardar el ejercicio de los derechos de las personas mayores que intervengan como parte, testigo o perito en un procedimiento judicial, y especialmente su derecho de acceso a la justicia, los tribunales de justicia deberán propender a la realización de las siguientes medidas:

1. Velar porque se respete el principio de igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la tramitación de los procesos judiciales en los que intervengan personas mayores en las calidades señaladas en el párrafo primero.

2. Resguardar, en las decisiones judiciales, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez de las personas mayores, así como su derecho a la seguridad, a una vida libre de violencia y maltrato, a recibir un trato digno, y a ser respetado y valorado sin ningún tipo de discriminación.
3. Promover y garantizar la debida diligencia y una atención preferente y prioritaria en todos los procesos judiciales en los que intervengan personas mayores en las calidades señaladas en el párrafo primero, asegurando siempre el respeto a las garantías del debido proceso. En los casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor, cuando esta sea interviniente en las mismas calidades referidas previamente, se propenderá a la priorización de la atención y agilización del procedimiento tratándose de las actuaciones efectuadas ante los tribunales de justicia

Lo dispuesto en los numerales anteriores también será aplicable a los auxiliares de la administración de justicia, en lo que corresponda a sus funciones dentro de un procedimiento.

Artículo 8.- Derecho a la independencia y a la autonomía. Las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su plan de vida y a desarrollar una vida autónoma e independiente, en igualdad de condiciones que las demás.

El Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho y, en especial, asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, teniendo en consideración un enfoque territorial, de género, de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas.

Los órganos del Estado y los auxiliares de la administración de justicia, salvo resolución judicial, no podrán exigir a las personas en razón de su edad, la acreditación del estado mental o lucidez para la suscripción o celebración de un acto.

Asimismo, el Estado promoverá el envejecimiento de las personas en sus propios hogares y barrios, garantizando su

autonomía y la integración de las personas mayores en sus círculos sociales.

Artículo 9.- Derecho a una vida libre de violencia. Las personas mayores tienen derecho a una vida libre de violencia.

Es deber del Estado promover la prevención de la violencia en contra de las personas mayores, en cualquiera de sus manifestaciones, y especialmente, dentro de la familia, en los lugares donde reciben servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad, para la efectiva protección de sus derechos. Asimismo, es deber del Estado promover, dentro del ámbito judicial y administrativo, procedimientos y mecanismos adecuados para la atención de casos de violencia.

El concepto de violencia contra la persona mayor comprende distintos tipos de abuso, incluyendo el maltrato físico, sexual, psicológico, laboral, patrimonial y financiero, así también como el abandono social.\_

Para los efectos de esta ley, se entenderá por abuso patrimonial el mal uso, explotación o apropiación de los bienes de una persona mayor, realizado sin su consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o engaño, realizado por parte de terceros, que resulte en un perjuicio patrimonial de la persona mayor. El abuso patrimonial se denominará abuso económico cuando el perjuicio provenga de un proveedor y se haya generado con ocasión de una infracción a la ley N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Este abuso económico se considerará una agravante para efectos de la determinación de las sanciones establecidas en el artículo 24 de la ley N° 19.496.

Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, son responsables de informar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas.

Artículo 10.- Derecho al acceso, participación y movilidad personal. Las personas mayores tienen derecho a acceder y participar en el entorno físico, social, económico, cultural, y a moverse en los diferentes modos de transporte.

A fin de garantizar el acceso, la participación y movilidad de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás personas, en forma independiente, segura y plena, el Estado establecerá, de manera progresiva, las medidas pertinentes en el entorno físico, el transporte, y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

Para dicho efecto, los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, y de Transporte y Telecomunicaciones deberán procurar adoptar medidas que consideren la accesibilidad universal y la eliminación de barreras, en la definición, diseño e implementación de sus políticas, planes y programas sectoriales, y en los reglamentos que correspondan, que promuevan y faciliten el acceso, participación y movilidad de las personas mayores antes referido.

Igualmente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia coordinará la elaboración de un plan intersectorial con el objeto de establecer medidas de acción en el entorno físico, en los servicios e instalaciones abiertos al público y en el transporte señaladas en los incisos anteriores, tanto en zonas urbanas como rurales, donde la necesidad de accesibilidad y movilidad de las personas mayores se considere prioritaria.

Para la elaboración de dicho plan, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia convocará a los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Hacienda y otros organismos de la administración del Estado que considere necesarios, incluidas las municipalidades.

Artículo 11.- Derecho a la participación e integración comunitaria. Las personas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad.

El Estado promoverá y deberá adoptar medidas para que las personas mayores puedan participar activamente en la comunidad y en actividades culturales, recreativas y deportivas, ya sean de iniciativa del Estado, sus organismos, organizaciones

promotoras del envejecimiento digno, activo y saludable o de los particulares.

Para la protección de este derecho, el Estado deberá establecer los mecanismos de participación en los organismos pertinentes. El Estado promoverá el derecho a la participación, mediante cuotas de acceso garantizado y beneficios al costo de ingreso en actividades de carácter recreacional, cultural, artístico y deportivo, tomando las medidas legales y administrativas necesarias.

Las personas mayores y las organizaciones que las representen participarán en el Comité Consultivo del Servicio Nacional del Adulto Mayor y los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores, en conformidad a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Estos últimos tendrán el carácter de Consejos de la Sociedad Civil, de acuerdo con el artículo 74 del decreto con fuerza de ley N° 1-19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado.

Artículo 12.- Derecho a la salud y a manifestar su consentimiento libre e informado. Las personas mayores tienen derecho a la protección de su salud física, mental y sexual, y a acceder al sistema de salud sin ningún tipo de discriminación.

El Ministerio de Salud elaborará una Política Nacional de Salud de las Personas Mayores, la que considerará los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Envejecimiento, y deberá contemplar un plan de acción, en el que se consideren acciones y programas de atención de salud temprana, preventiva y de salud mental de las personas mayores.

Las personas mayores gozarán de los derechos consagrados en la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, especialmente su derecho a manifestar su consentimiento libre e informado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la ley N° 21.331, del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental.

Las personas mayores tienen derecho a ser atendidas preferente y oportunamente en las instituciones del sistema de salud y a que se les brinde la información completa en lenguaje claro, simple y adecuado, debiendo el Estado velar por que se adopten actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas.

El Estado deberá realizar los ajustes razonables para obtener el consentimiento informado de la persona mayor.

Artículo 13.- Derecho a la educación. Las personas mayores tienen derecho a la educación, cuya finalidad es que éstas alcancen su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico, sexual y físico, durante las distintas etapas de la vida de las personas.

En virtud de lo anterior, podrán participar en los programas educativos disponibles, ya sea a través de la educación de adultos en los niveles de educación básica y media, o de la educación superior, así como en las actividades de capacitación de oficios, ocupaciones y desarrollo de habilidades en el uso de nuevas tecnologías de la información, que permitan su inserción laboral, en la medida en que exista oferta disponible para cada uno de los niveles educativos señalados.

Asimismo, las personas mayores tienen derecho a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones, en consideración a su diversidad cultural.

El Estado, a través de los Ministerios de Educación, Trabajo y Previsión Social, y Economía, Fomento y Turismo, y de los demás órganos que corresponda, en el ámbito de sus competencias, deberá promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesibles a las personas mayores, atendiendo su identidad y necesidades, debiendo, además, promover los contenidos de un envejecimiento digno, activo y saludable.

Artículo 14.- Ocio, deporte, vida activa y turismo. El Estado promoverá el bienestar, desarrollo personal y social de las personas mayores, a través del ocio, deporte, turismo y otras instancias que permitan su vida activa.

El Estado, a través del Ministerio del Deporte, y los demás órganos que correspondan, con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuando corresponda, desarrollará programas al efecto, los que podrán ser implementados por instituciones públicas o privadas, y por organizaciones de personas mayores, las que deberán ser parte del registro establecido en la letra g) del artículo 3° de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Respecto al turismo, el Estado, a través del Servicio Nacional de Turismo o del Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuando corresponda, propenderá al desarrollo de programas que permitan a las personas mayores la realización de viajes dentro del país con fines de esparcimiento, conocimiento, recreación y cultura.

Artículo 15.- Derecho al trabajo. Las personas mayores tienen derecho al trabajo digno y decente, con igualdad de oportunidades y de trato respecto a los demás.

El Estado tiene el deber de dar protección al ejercicio del derecho al trabajo de la persona mayor y erradicar las conductas discriminatorias por motivos de edad.

El Estado, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fomentará que las y los empleadores adopten políticas y/o estrategias específicas de manejo y gestión de personal que consideren el desarrollo de las personas a lo largo de su vida laboral, con enfoque de ciclo de vida, cooperación intergeneracional y de transición a la jubilación. Estas políticas y/o estrategias deberán considerar el reclutamiento, desarrollo profesional, las condiciones laborales, la capacitación y perfeccionamiento, y la transferencia de conocimiento, en las distintas etapas de la vida de los y las trabajadoras.

De la misma manera, el Servicio Civil incorporará en las orientaciones técnicas de políticas de gestión de personas, lineamientos que consideren el desarrollo de las personas a lo largo de su vida laboral, con enfoque de ciclo de vida, cooperación intergeneracional y transición a la jubilación.

Asimismo, tienen derecho al reconocimiento de su trayectoria laboral como fuente de conocimiento y la valorización positiva de sus conocimientos adquiridos en cursos que han sido certificados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el Servicio de Cooperación Técnica u otro organismo afín, estudios técnicos y superiores, sean estos de pregrado o postgrado.

Artículo 16.- Derecho a la información. Las personas mayores tienen derecho a la información en igualdad de condiciones que las demás.

El Estado otorgará información completa y en lenguaje claro, simple y adecuado en toda actuación o procedimiento ante los órganos de la Administración del Estado y de cualquier institución pública, para el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad a la ley.

Artículo 17.- Derecho a la libertad de expresión y de opinión. La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección.

El Estado podrá adoptar medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.

Artículo 18.- Derecho a la conectividad. Las personas mayores tienen derecho a acceder y manejar medios digitales, los cuales deberán ser desarrollados de manera intuitiva.

El Estado promoverá la inclusión digital de las personas mayores, así como también el desarrollo de las páginas web y otros medios digitales de fácil acceso.

Artículo 19.- Derecho a la privacidad y a la intimidad. La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.

El Estado podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.

## TÍTULO II POLÍTICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO

Artículo 20.- Deberes generales del Estado. Es deber del Estado y sus organismos, en el marco de sus competencias y en la forma prevista por la ley, promover un trato digno e igualitario a las personas mayores en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, debiendo:

a) Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas que las vulneran.

b) Adoptar medidas afirmativas y realizar ajustes necesarios para el ejercicio de sus derechos.

c) Promover la participación de las personas mayores en la elaboración, aplicación y control de las políticas públicas dirigidas a dicha población.

d) Fortalecer la institucionalidad relacionada con la promoción del envejecimiento activo, con la autonomía, independencia y participación, protección y cuidado de las personas mayores.

Las acciones y medidas de apoyo y cuidado de la persona mayor que los órganos de la Administración del Estado y entidades privadas colaboradoras del Estado brinden a las personas mayores, sea que se ejecuten directamente o a través de terceros, deberán realizarse respetando la dignidad e integridad física y psíquica de la persona mayor, así como también el respeto de su autonomía, en condiciones de igualdad, considerando un enfoque preventivo, gerontológico, de género, de derechos humanos, de curso de vida, territorial, comunitario y

biopsicosocial, que aborde tanto las necesidades de salud como sociales de las personas mayores.

Artículo 21.- Política Nacional de Envejecimiento. Existirá una Política Nacional de Envejecimiento que tendrá como principal propósito promover un envejecimiento digno, activo y saludable para toda la población y la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores consagrados en esta ley y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Esta política deberá contener, al menos, las acciones que contribuyan al envejecimiento digno, activo y saludable en el ámbito de la salud, laboral, educativo, de participación ciudadana, de acceso y desplazamiento personal en el entorno físico, de acceso a las tecnologías de la información y de acceso a las manifestaciones culturales, al deporte y a la actividad física. Todo ello, considerando los principios generales de la presente ley, establecidos en el artículo 3.

La Política será propuesta al Presidente de la República por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, y se aprobará por decreto supremo expedido por el Presidente de la República, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La elaboración de la propuesta de la política será realizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y contemplará instancias de participación ciudadana incidente, a través de encuentros y diálogos con la sociedad civil, incluyendo la participación de los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores. Los gobiernos regionales y las municipalidades podrán definir instancias de participación para presentar propuestas durante este proceso de elaboración.

El Servicio Nacional del Adulto Mayor deberá realizar una evaluación periódica e integral del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la Política Nacional de Envejecimiento. Esta evaluación deberá revisarse, al menos, cada cinco años. La duración de la política no podrá exceder los diez años, debiendo dictarse nuevamente al término de dicho período en la forma señalada en este artículo.”.

Artículo 22.- Líneas de acción. El Estado, a través de sus ministerios competentes y, especialmente, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, directamente o en coordinación con otros órganos del Estado, deberá propender a la realización de las líneas de acción contempladas en el presente artículo. Para efectos de esta ley, se entienden como líneas de acción las distintas modalidades de atención que el Estado realiza respecto de las personas mayores que contribuyen a mejorar su calidad de vida, y al ejercicio efectivo y pleno de sus derechos y libertades:

a) Programas de apoyo y cuidado para personas mayores con dependencia que cuenten o no con cuidadores.

b) Programas para promover y fortalecer la asociatividad, participación, autonomía e independencia de las personas mayores.

c) Elaboración de estándares de calidad de infraestructura pública específica para personas mayores, asistencia técnica y supervisión de dispositivos de atención para personas mayores, según corresponda.

d) Financiamiento de iniciativas de apoyo directo para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores dependientes y vulnerables que residen en establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

e) Programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las personas mayores.

f) Programas de promoción de medidas para el acceso de las personas mayores, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico incluida la vivienda, los espacios y edificios públicos, y el transporte público urbano y rural, a través de la accesibilidad universal y la eliminación de barreras arquitectónicas; así como el acceso a la participación cívica y social para su inclusión social, el empleo, la comunicación e información, y a los servicios de salud, apoyo comunitario, entre otros.

g) Programas que tengan por objeto contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, respetando su autonomía y sus derechos.

Lo señalado en este artículo deberá realizarse considerando la oferta pública existente y los recursos disponibles.

### TÍTULO III DEL ABANDONO SOCIAL DE LA PERSONA MAYOR

Artículo 23.- Del abandono social de la persona mayor. Se entenderá por abandono social la vulneración grave de los derechos de la persona mayor con dependencia, que ponga en peligro su vida, integridad física o psíquica, en los casos que dicha vulneración haga suponer la falta de redes de apoyo familiar o social.

En caso de que las personas mayores hubieran sido víctimas de abandono social u otro tipo de abandono que no permite configurar los requisitos del abandono social, podrán recurrir a los programas especializados con los que cuenta el Servicio Nacional del Adulto Mayor para procurar el restablecimiento de sus derechos.

Las personas mayores víctimas de abandono social también podrán concurrir ante el tribunal con competencia en asuntos de familia dentro del territorio jurisdiccional de su residencia o domicilio para que adopte las medidas necesarias para resguardar sus derechos. Dicho procedimiento judicial se substanciará de acuerdo con las normas establecidas en el Párrafo quinto del Título IV de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y en lo no previsto en ellas, por las disposiciones del Título III de la misma ley.

### TÍTULO IV DEL FOMENTO DEL ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL, ARTÍSTICO O DEPORTIVO

Artículo 24.- Cuota de acceso para personas mayores. Toda persona natural o jurídica de carácter privado que organice un espectáculo o lugar abierto al público de carácter cultural, artístico o deportivo, deberá establecer una cuota de al menos cinco por ciento de venta exclusiva de entradas a público para

personas mayores, la que deberá estar disponible durante un plazo de al menos 48 horas desde el inicio de la venta de entradas. Una vez transcurrido dicho plazo, los organizadores podrán realizar la venta de dichas entradas a todo público.

Artículo 25.- Tarifa rebajada para personas mayores. Las personas mayores que accedan al porcentaje de venta exclusiva establecido en el artículo anterior tendrán derecho a una rebaja de a lo menos el cincuenta por ciento del costo de ingreso a los espectáculos o lugares abiertos al público, cuando éstos sean organizados por una persona natural o jurídica de carácter privado.

Para el goce de este beneficio bastará la sola exhibición de la cédula de identidad al momento de la compra de la entrada al espectáculo en cuestión. Los organizadores de estos espectáculos dispondrán de un mecanismo para que este beneficio pueda hacerse efectivo, también, al momento de comprar entradas a través de medios electrónicos.

Las entradas que sean adquiridas haciendo uso de este beneficio serán de carácter personal e intransferible, pudiendo exigirse por parte de los organizadores acreditar el cumplimiento del requisito de sesenta años de edad al momento de hacer uso de ella, de conformidad con el inciso anterior.

Artículo 26.- Deber de publicidad. Las personas naturales o jurídicas a las que resulte aplicable esta ley deberán publicitar el número de entradas disponibles exclusivamente para personas mayores en sus canales de venta al público, dentro del plazo reservado para tales efectos.

Artículo 27.- Sanción por contravención. Las infracciones a lo dispuesto en este título se entenderán como una contravención al derecho a la no discriminación arbitraria que establece el artículo 3°, letra c), de la Ley N°19.496, sin perjuicio de los demás derechos que asistan a las personas mayores en calidad de consumidores.

TÍTULO V  
MODIFICACIONES LEGALES  
Párrafo I

### Acceso a la justicia

Artículo 28.- Modifícase la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, en los siguientes términos:

1. Intercálese, a continuación del numeral 16) del artículo 8°, el siguiente numeral 17), nuevo, pasando el actual numeral 17) a ser 18):

"17) Los asuntos relativos a las personas mayores respecto de los cuales sea necesario adoptar alguna de las medidas a que se refiere el Párrafo quinto del Título IV."

2. Modifícase el artículo 92, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, el párrafo primero del numeral 8 del inciso primero, por el siguiente:

"8. Establecer medidas de protección para personas mayores, personas con discapacidad o personas afectadas por alguna incapacidad."

b) Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

"El juez, para dar protección a personas mayores, podrá ordenar además las medidas cautelares establecidas en el Párrafo quinto del Título IV."

c) Elimínase el inciso quinto.

3) Intercálese, a continuación del Párrafo cuarto del Título IV, el siguiente Párrafo quinto:

#### "Párrafo quinto

Del procedimiento judicial para la aplicación de medidas de protección en favor de las personas mayores

Artículo 102 Ñ.- Objetivos del procedimiento. Este procedimiento tiene por objeto decretar medidas de protección en favor de personas mayores cuando la vulneración que les afecta sea constitutiva de abandono social.

Para los efectos de este procedimiento, se entenderá abandono social la definición señalada en el artículo 23 de la

Ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, configurándose cuando:

a) La víctima sea una persona mayor con dependencia que sufra una vulneración grave de sus derechos;

b) Dicha vulneración grave de los derechos ponga en peligro la vida o integridad física o psíquica de la víctima; y,

c) Dicha vulneración grave, además, haga suponer la falta de redes de apoyo familiar o social.

En lo no previsto por este párrafo, se aplicarán a este procedimiento las normas del Título III.

Artículo 102 O.- Representación judicial. El tribunal velará porque los intereses de la persona mayor víctima de abandono social se encuentren debidamente representados, pudiendo designar a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que la víctima carezca de representante judicial y/o existan indicios de que no puede procurarse debidamente dicha representación por sus propios medios.

El tribunal realizará esta designación en la primera resolución que se dicte en este procedimiento.

Artículo 102 P.- Inicio del procedimiento. El procedimiento se podrá iniciar de oficio por el tribunal o por denuncia efectuada por la persona mayor, el Servicio Nacional del Adulto Mayor o cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven, sin necesidad de formalidad alguna.

Los denunciantes deberán acompañar los antecedentes que sean pertinentes para acreditar el abandono social de la víctima. En caso de no contar con dichos antecedentes, los denunciantes podrán solicitar al tribunal oficiar al Servicio de Salud y/o a cualquier otra institución pública pertinente, para requerir los antecedentes que permitan acreditar que la persona mayor víctima del abandono se encuentra en situación de abandono

social. Dicha solicitud también podrá ser realizada de oficio por el tribunal.

Artículo 102 Q.- Medidas cautelares. En cualquier momento del procedimiento o antes de su inicio, de oficio o a solicitud de las personas o instituciones indicadas en el artículo precedente, el tribunal podrá adoptar las siguientes medidas cautelares, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinente, por un máximo de noventa días, en el caso que sea necesario para proteger los derechos de las personas mayores:

a) Prohibir o limitar la entrada o presencia de ciertas personas en el hogar de la persona mayor. De adoptar esta medida, el tribunal deberá velar por el correcto resguardo de derechos y el bienestar de la persona mayor.

b) Autorizar el traslado de la persona mayor desde un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado a su domicilio, residencia o a un establecimiento de larga estadía, cuando así lo aconseje su médico tratante.

c) Autorizar el ingreso a un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, y sea indispensable para proteger la integridad física o psíquica de la persona mayor.

La resolución que imponga una o más medidas cautelares deberá fundarse en antecedentes suficientes que consten en el expediente de la causa, de los que se dejará expresa constancia en la misma resolución.

Para ello, el tribunal podrá ordenar la realización de evaluaciones médicas, psicológicas, sociales o las demás que considere necesarias. En la realización de estas evaluaciones deberán resguardarse siempre los derechos consagrados en la ley N° 20.584, que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud y las reglas establecidas en el Título III, de la ley N° 21.331, del Reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental.

Las medidas cautelares establecidas en los literales b) y c) del presente artículo serán dictadas por el tribunal resguardando siempre los derechos de las personas mayores

establecidos en la presente ley, especialmente el derecho a la independencia y autonomía consagrado en el artículo 9, así como los demás derechos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, la Constitución Política de la República y las demás leyes.

Artículo 102 R.- Audiencia preparatoria. El tribunal fijará la audiencia preparatoria dentro de los diez días siguientes a la presentación de la denuncia. A ella se citará a la persona mayor, a las personas a cuyo cuidado ésta se encuentre y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto y/o verse afectados por la dictación de una o más medidas de protección ordenadas en favor de la persona mayor.

En esta audiencia, el tribunal podrá ordenar la realización de evaluaciones médicas, psicológicas, sociales o las demás que considere necesarias, de acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 102 Q.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez oídas las personas citadas, el tribunal, si contare con los elementos probatorios suficientes, podrá dictar sentencia definitiva en la misma audiencia. De lo contrario, examinados los antecedentes incorporados en la causa, fijará los puntos de prueba y citará a audiencia de juicio, la que deberá celebrarse dentro de un plazo máximo de 10 días contados desde la celebración de la audiencia preparatoria o desde la recepción de las evaluaciones solicitadas, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 102 S.- Audiencia de juicio. Esta audiencia tendrá por objeto recibir la prueba, en base a los puntos de prueba fijados en la audiencia preparatoria y decidir el asunto sometido a conocimiento del tribunal.

El tribunal citará a las personas cuya comparecencia se requiera de conformidad a lo dispuesto en el artículo 102 R.

Artículo 102 T.- Sentencia definitiva. La sentencia definitiva se pronunciará sobre las medidas de protección a favor de la persona mayor, y podrá ordenar:

a) La restitución material de bienes muebles o inmuebles a la persona mayor, en aquellos casos en que, esta pueda acreditar la plena propiedad o el usufructo sobre dichos bienes, y los requeridos no tengan la tenencia o posesión legítima sobre los mismos.

b) El ingreso de la persona mayor en establecimientos que desarrollen programas especializados para personas mayores.

c) La derivación a programas públicos dirigidos a personas mayores.

d) Otras medidas que cautelen la vida y la integridad física y psíquica de la persona mayor.

Las medidas de protección contenidas en el presente artículo serán dictadas por el tribunal resguardando siempre los derechos de las personas mayores establecidos en la presente ley, especialmente el derecho a la independencia y autonomía consagrado en el artículo 9, así como los demás derechos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, la Constitución Política de la República y las demás leyes.

Para dictar sentencia, el tribunal podrá ordenar la realización de evaluaciones médicas, psicológicas, sociales o las demás que considere necesarias, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 102 Q.

Artículo 102 U.- Revisión de las medidas de protección. Mientras se encuentre en ejecución la medida de protección, haya sido ésta dictada de manera cautelar o en sentencia definitiva, y a solicitud de cualquiera de las partes del procedimiento, el tribunal podrá revisar la medida de protección dictada en este procedimiento.

Para ello, la parte interesada deberá presentar nuevos antecedentes que justifiquen su petición. El tribunal deberá citar a audiencia en la que se discutirá la petición, la que se llevará a cabo dentro de 10 días desde presentada la solicitud. A esta audiencia deberá citarse al peticionario, a la persona mayor y/o a su representante legal y a cualquier otro interesado en la revisión de la medida de protección.

El tribunal podrá modificar, ampliar, restringir y/o dejar sin efecto la medida de protección. Para ello, deberá ponderar los antecedentes que se presenten en la petición y/o en la referida audiencia, debiendo determinar si éstos permiten acreditar que se ha extinguido o modificado la necesidad de protección de la persona mayor que justificó la interposición de la medida.

Artículo 102 V.- Entrega de información sobre oferta programática del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Con el objeto de que el tribunal pueda contar con antecedentes suficientes y actualizados para dictar las medidas de protección que se disponen en este Párrafo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor deberá informar en los términos dispuestos en el literal e) del artículo 5 bis de la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

#### Párrafo II

#### De la Protección Laboral de los Trabajadores Adultos Mayores

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

1. Incorpórase el siguiente Capítulo XI en el Título II del Libro I, que reza como sigue:

#### Capítulo XI

#### Del contrato del trabajador persona mayor

Artículo 152 quinquies J.- Ámbito de aplicación. Se podrá regir por las normas de este capítulo el contrato individual que el trabajador persona mayor celebre con el empleador. Para estos efectos, se considerará trabajador persona mayor a toda persona que cumpla el requisito de edad establecido en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.828, que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Artículo 152 quinquies K.- Compatibilidad de las funciones con la salud del trabajador persona mayor. Las funciones del trabajador persona mayor pactadas en el contrato

de trabajo deberán ser compatibles con su condición física y sus capacidades, considerando los requerimientos de dichas funciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 184.

Artículo 152 quinquies L.- Duración y distribución de la jornada de trabajo. Bajo esta modalidad de contratación, la jornada de trabajo estará sujeta al límite semanal establecido en el inciso primero del artículo 22 y al límite diario establecido en el inciso segundo del artículo 28, ambos de este Código.

Las partes podrán distribuir la jornada ordinaria señalada en el inciso anterior, de acuerdo a una de las siguientes alternativas:

a) Jornada con bandas horarias. El contrato podrá contener una o más bandas horarias, con horarios diferidos de entrada y de salida.

Si las partes acordaren diferentes bandas horarias, el trabajador persona mayor tendrá la facultad de optar, unilateralmente, por cualquiera de aquéllas, indicándose en el contrato la anticipación del aviso del cambio de banda y la cantidad de veces en el mes que el trabajador persona mayor podrá hacer uso de esta facultad. En caso que nada se señale en el contrato, se entenderá que el trabajador persona mayor no requerirá de anticipación del aviso, ni tendrá limitación en la cantidad de veces al mes que podrá hacer uso de esta facultad.

b) Jornada de libre elección horaria. La jornada convenida por las partes se podrá distribuir como libremente escoja el trabajador persona mayor, pero considerando que el cumplimiento de sus obligaciones deberá realizarse dentro del horario de funcionamiento de la empresa o establecimiento, o dentro del rango horario que libremente elijan las partes, y conforme a la naturaleza de sus funciones.

La elección de la alternativa de distribución de jornada, ya sea con bandas horarias o de libre elección, deberá constar por escrito y estará vigente mientras no se pacte una nueva opción. Esta elección podrá fundarse, entre otras, en la naturaleza de las funciones, la condición física o de salud del trabajador persona mayor, su situación familiar, la distancia de su domicilio, o bien, diferentes jornadas en invierno o verano.

Por su parte, cuando la naturaleza de las funciones a desarrollar o la condición física del trabajador persona mayor lo aconsejen, éste podrá regirse por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22, lo que deberá consignarse en el contrato de trabajo.

En cualquier caso, la prestación de servicios deberá considerar las reglas generales de descansos diario y semanal establecidas en este Código.

La duración y distribución de la jornada de trabajo, la oferta original del contrato y la remuneración pactada en él, no podrá ser alterar ni modificada unilateralmente, salvo acuerdo expreso de las partes, y siempre velando por el interés de la persona mayor en su calidad de trabajador.

Artículo 152 quinquies M.- Feriado Anual. El trabajador persona mayor podrá hacer uso anticipado de su feriado anual y de forma proporcional a los días devengados, a partir del séptimo mes contado desde el inicio de la prestación de servicios. En estos casos, no se aplicará la regla del fraccionamiento establecida en el inciso primero del artículo 70 de este Código.

Artículo 152 quinquies N.- Contratación previa a tener la calidad de trabajador persona mayor. Los trabajadores que adquieran la calidad de trabajador persona mayor durante la vigencia del contrato de trabajo, continuarán rigiéndose por los términos y condiciones del contrato de trabajo que se encontrare vigente con anterioridad a adquirir la mencionada calidad, salvo que las partes acuerden acogerse a las normas de este capítulo.”.

2. Agrégase un numeral 7 al artículo 159, del siguiente tenor:

7.- Cuando estando vigente un contrato indefinido por más de dos años y sea aceptada la solicitud de Jubilación del Trabajador que no desee continuar prestando servicios a su empleador, reciba su correspondiente certificado de saldo.

En los casos aplicables a esta causal de término de contrato, el trabajador, tendrá derecho a ser indemnizado en los

términos del inciso segundo del artículo 163, con un límite máximo de ciento veinte días de remuneración. La indemnización a la que tendrá derecho el trabajador, no será incompatible con ninguna otra a la que el trabajador pudiera tener derecho.”.

3. Intercálase el siguiente artículo 162 bis, del siguiente tenor:

Artículo 162 bis.- En los casos que el contrato de trabajo termine de acuerdo con la causal del numeral 7 del artículo 159, el trabajador deberá comunicar de esta circunstancia personalmente o por carta certificada al empleador. Cuando la comunicación sea por carta certificada, esta, deberá ser enviada al domicilio señalado en el contrato, con copia a la inspección del trabajo respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción por parte del trabajador de su correspondiente certificado de saldo, que permita acreditar la aceptación de la jubilación solicitada. La mencionada carta deberá expresar la circunstancia de haberse cumplido la mencionada causal.

### Párrafo III

#### Fortalecimiento institucional

Artículo 30.- Incorpórase, en el artículo 15 de la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, el siguiente inciso segundo:

El Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia deberá sesionar, al menos, una vez al año, para conocer de las materias establecidas en el artículo 1°, relacionadas con personas mayores. En dicha instancia deberá conocer, al menos, de los informes anuales elaborados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor sobre el estado general de la vejez y el envejecimiento a nivel nacional y regional, aprobar la propuesta de Política Nacional de Envejecimiento, cuando corresponda, y conocer del plan estratégico para las personas mayores y su estado de implementación.

Artículo 31.- Modifícase la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en los siguientes términos:

1) Sustitúyense, los términos "adulto mayor" por "persona mayor", todas las veces que aparecen, salvo en aquellas expresiones referidas al Servicio Nacional del Adulto Mayor.

2) Elimínase, en el inciso primero del artículo 2°, la expresión ", funcionalmente".

3) Incorpóranse, en el artículo 3°, las siguientes letras m), n), o) y p), nuevas:

"m) Prestar asesoría y soporte técnico al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en las sesiones que conozca de materias relacionadas a personas mayores y envejecimiento.

n) Velar por el respeto y ejercicio de los derechos de las personas mayores establecidos en la ley y disposiciones reglamentarias, incluyendo la facultad de denunciar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes cuando estos derechos no sean respetados, ejerciendo acciones judiciales o haciéndose parte en causas ya iniciadas, en el que se vean afectados los derechos de la persona mayor y revistan carácter de gravedad, relevancia o interés social comprometido, de conformidad a la ley.

o) Atender en forma preferente, a través de las instituciones con las que haya celebrado convenios, a las personas mayores para representarlos en juicio y/o asesorarlos en materias jurídicas técnicas, o en los tribunales de familia, cuando así lo soliciten.

p) Solicitar datos estadísticos relevantes en materia de personas mayores y envejecimiento a las distintas instituciones públicas, en el marco de esta ley. Estos datos podrán solicitarse desagregados de conformidad con las variables que el Servicio considere pertinentes, tales como: tramos etarios, sexo, patologías, distinción entre zonas rurales o urbanas, diferencias por región, provincia o comuna, entre otras.

4) Agréganse, en el artículo 5°, las siguientes letras g), h), i), y j) del siguiente tenor:

“g) Elaborar la Política Nacional de Envejecimiento, la que deberá ser aprobada por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia y por el Presidente de la República.

h) Elaborar el plan estratégico para las personas mayores, el cual deberá ser informado al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, establecido en el artículo 16 bis A de la ley N° 20.530 que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, así como también del estado de su implementación.

i) Velar por el cumplimiento de los acuerdos e instrucciones en materia de vejez y envejecimiento que adopte el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, establecido en la ley N° 20.530.

j) Informar anualmente al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, establecido en la ley N° 20.530, acerca del cumplimiento de las decisiones adoptadas por éste.

5) Intercálase el siguiente artículo 5° bis:

“Artículo 5° bis.- En cada región del país existirá una Dirección Regional del Servicio, a cargo de un funcionario con la denominación de Director Regional. A los Directores Regionales les corresponderán las siguientes funciones y atribuciones:

a) Ejecutar las políticas y planes fijados por el Servicio en la respectiva región, de acuerdo a las instrucciones que les imparta el Director Nacional.

b) Coordinar las políticas públicas y planes que conciernan a las personas mayores, ejecutados por los distintos órganos de la Administración del Estado a nivel regional.

c) Ejercer la secretaría ejecutiva del Comité Regional para el Adulto Mayor establecido en el artículo 12°.

d) Fomentar la participación social de las organizaciones de y para las personas mayores en la gestión de las políticas públicas en la respectiva región.

e) Informar, cada cuatro meses, a la o las Cortes de Apelaciones que corresponda, la oferta de programas para personas mayores y los cupos disponibles en la región, así como las instituciones públicas y privadas con las que haya celebrado convenios, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3 letra o).

f) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el Director Nacional les delegue o que las leyes les asignen.

6) Artículo 5° ter. - Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores. Créanse los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores, en adelante, los Consejos, como organismos asesores del Servicio Nacional del Adulto Mayor, a través de las Direcciones Regionales. Existirá un Consejo en cada región, la protección de sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía activa, entre otras.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará los requisitos para ser consejero, la forma de elección de sus representantes y los criterios de participación de los diferentes tipos de organizaciones de cada región, respetando criterios de participación en igualdad de condiciones. Asimismo, corresponderá al reglamento fijar las normas generales de funcionamiento de los Consejos y las causales de cesación en el cargo de los consejeros.

Los Consejos no podrán estar formados por más de veinte ni por menos de diez representantes, de acuerdo con la población de personas mayores de cada región.

7) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 6°, a continuación de la frase "con amplia trayectoria en materias de adulto mayor, y por", la expresión "cuatro" por "siete".

8) Sustitúyese, en el inciso sexto del artículo 7°, la frase ", apoyo y promoción de adultos mayores indigentes abandonados", por la siguiente: "o que promuevan la inclusión de las personas mayores en situación de vulnerabilidad".

9) Créanse en la planta de personal de Directivos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, fijada en el artículo 9°, los siguientes cargos, afectos al segundo nivel jerárquico del

Sistema de Alta Dirección Pública del Título VI de la ley N° 19.882: 1 cargo de Subdirector, grado 3°, y 16 cargos de Director Regional, grado 6°.

10) Reemplázase el artículo 12, por el siguiente:

"Artículo 12.- Créanse los Comités Regionales para la Persona Mayor, en adelante los Comités, como órganos colaboradores del Servicio encargados de administrar, de acuerdo al Reglamento, el Fondo Concursable para el Adulto Mayor, y los demás recursos que le sean donados o legados para fines específicos, y asesorar al Gobernador Regional en la promoción y aplicación a nivel regional de los planes y programas relativos a personas mayores, en conformidad con los lineamientos propuestos por la Política Nacional de Envejecimiento y los Consejos Regionales de las Personas Mayores.

Los Comités serán presididos por el Gobernador Regional, su secretaría ejecutiva radicará en el Director Regional del Servicio, y estará integrado por los secretarios regionales ministeriales de los ministerios que determinen el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia y el Director Regional del Servicio. Asimismo, se integrarán representantes de las municipalidades y de las organizaciones civiles de la región, que presten servicios o realicen trabajos directos con personas mayores. El mecanismo y porcentaje de representación serán determinados por el secretario regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia y el Director Regional del Servicio, de acuerdo a criterios objetivos.

En todo lo demás, los Comités se regirán por el Reglamento."

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia en un plazo de doce meses contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Los Consejos Asesores Regionales de las Personas Mayores a que hace referencia el artículo 5° ter de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto

Mayor, incorporado a dicha norma por el numeral 6) del artículo 31 de esta ley serán los continuadores legales de los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores creados mediante el decreto supremo N° 8, de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo tercero.- El Consejo Interministerial de Desarrollo Social y Familia deberá sesionar para conocer de las materias establecidas en el artículo 1°, relacionadas con personas mayores, dentro de los treinta días desde la entrada en vigencia de esta ley, de acuerdo al artículo primero transitorio.

Artículo cuarto.- La Política Nacional de Envejecimiento a la que se refiere el artículo 15, deberá dictarse en un plazo máximo de **seis meses** contado desde la entrada en vigencia de la presente ley. La Política Nacional de Envejecimiento señalada anteriormente sucederá a la "Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2015 - 2025".

Artículo quinto.- Al tercer año desde su entrada en vigencia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con el Ministerio de Hacienda, deberán evaluar e informar respecto de la implementación y aplicación de la presente ley. El informe deberá considerar especialmente las acciones del Estado y formular propuestas para mejorar la aplicación de la ley, de existir antecedentes que así lo justifiquen.

El informe será remitido a la Comisión que corresponda del Senado; y a las Comisiones de Personas Mayores y Discapacidad, Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados. El referido informe deberá publicarse en el sitio electrónico de los ministerios respectivos.

Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con reasignaciones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que

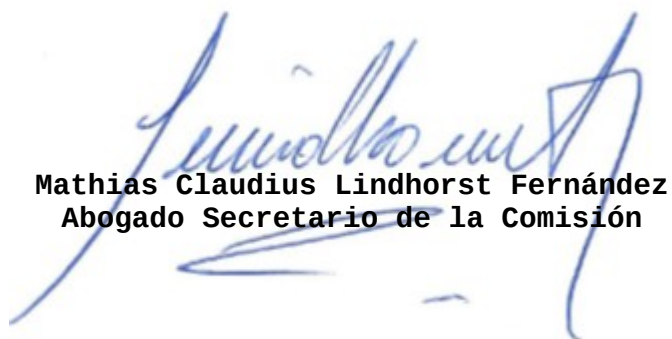
anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

Artículo séptimo.- En el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá dictar los nuevos reglamentos, en conformidad con las disposiciones de la presente ley. Lo anterior no impide exigir el cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta ley.

\*\*\*\*\*

Tratado y acordado en sesiones de 9 y 10 de junio de 2025, con la asistencia de las diputadas y diputados señoras Catalina Del Real Mihovilovic, Jorge Guzmán Zepeda, Daniel Melo Contreras, Carolina Marzán Pinto, Carla Morales Maldonado, Marlene Pérez Cartes, Joanna Pérez Olea, Camila Rojas Valderrama, Marisela Santibáñez Novoa, Alexis Sepúlveda Soto, Renzo Trisotti Martínez, Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 10 de junio de 2025.



**Mathias Claudius Lindhorst Fernández**  
**Abogado Secretario de la Comisión**

## VIII.- INFORME FINANCIERO

Se hace presente que el informe financiero que se adjunta a continuación es complementario del proyecto de ley en informe y dice relación con las indicaciones N° 088-373 formuladas por el Ejecutivo en el contexto de la discusión en general en el pleno.



Ministerio de Hacienda  
Dirección de Presupuestos  
Reg. 148GG

**I.F. N°148/09.06.2025**  
I.F. N°104/21.04.2025  
I.F. N°93/07.04.2025  
I.F. N°66/18.03.2024

I.F. N°76/27.05.2022  
I.F. N°094/15.07.2021  
I.F. N°164/30.09.2020

### Informe Financiero Complementario

**Proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor**

**Boletines refundidos N° 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07**

#### I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N° 088-373) buscan complementar el Proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Específicamente, suprime el Párrafo referente a la protección laboral de los trabajadores adultos mayores.

#### II. Efectos las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Dado el carácter normativo de estas indicaciones, estas **no tendrán incidencia en el presupuesto fiscal.**

#### III. Fuentes de información

- Oficio N° 088-373 de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual presenta indicaciones al Proyecto de Ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor (Boletines N°s. 13.822-07, 12.451-13 y 12.452-13, refundidos).



## INDICE

<b>I.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.....</b>	<b>2</b>
<b>II.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.....</b>	<b>2</b>
1. ARTÍCULOS QUE EL SENADO CALIFICÓ COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO Y AQUELLOS A LOS CUALES LA COMISIÓN OTORQUE IGUAL CARÁCTER.....	2
3. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, LOS QUE DEBERÁN SER DETERMINADOS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.....	3
5. MENCIÓN PRECISA DE LAS RESERVAS DE CONSTITUCIONALIDAD FORMULADAS.....	3
6. CIRCUNSTANCIA DE HABERSE COMUNICADO A LA CORTE SUPREMA LAS DISPOSICIONES QUE HAN SIDO INCORPORADAS EN ESTE TRÁMITE AL PROYECTO O HAN SIDO OBJETO DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES RESPECTO DE LAS CONOCIDAS POR DICHA CORTE (ARTÍCULO 304 N° 9 RCD).....	3
7. DIPUTADA INFORMANTE.....	3
8. INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.....	4
<b>V.- SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN, Y ACUERDOS ADOPTADOS.....</b>	<b>6</b>
DISCUSIÓN PARTICULAR.....	6
Al Artículo 3, inciso segundo.....	6
literal d).....	6
Letra i).....	7
letra ñ).....	7
Letra p).....	8
Al Artículo 4.....	8
letra a).....	8
Letra f).....	9
Letra g).....	10
Al artículo 5, inciso cuarto.....	10
Al artículo 6, inciso tercero.....	11
Al artículo 7, numerales 3 y 4.....	12
Artículo 8, nuevo.....	13
Al artículo 8, inciso segundo.....	15
Artículo 14.....	16
Al artículo 20, inciso final.....	17
Al artículo 23, inciso segundo.....	18
Al artículo 28, numeral 3, párrafo quinto. Al artículo 102 Ñ.....	18
Al artículo 102 O.....	19
Al artículo 102 Q.....	20
Al artículo 102 R.....	21
Al artículo 102 S.....	22
Al artículo 102 T.....	23

Al artículo 102 V.....	26
Artículo 29.....	27
Artículo 31, Numeral 3, Letra P.....	31
Artículo 31, Numeral 4).....	32
Artículo 31, Numeral 5).....	33
Artículo 31, Numeral 6).....	34
Artículo 32.....	36
Artículos Segundo Transitorio.....	38
Artículo Sexto Transitorio.....	39
Artículo Séptimo Transitorio.....	40
<b>VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.....</b>	<b>40</b>
<b>VIII.- INFORME FINANCIERO.....</b>	<b>72</b>